



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS

“La incompleta protección indemnizatoria del Soat, como fundamento jurídico de responsabilidad de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad”

Autora:

Bach. Sánchez Burga, Cynthia Beatriz

Para obtener el título profesional de Abogada

Asesor:

Dr. Gamonal Guevara, José Eloy

Lambayeque, 2022

Tesis denominada “La incompleta protección indemnizatoria del Soat, como fundamento jurídico de responsabilidad de las aseguradoras, basada en el principio de culpabilidad.”, presentada para optar el TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA, por:



Bach. Sánchez Burga Cynthia Beatriz
Autor



Abog. Gamonal Guevara José Eloy
Asesor

APROBADO POR:



Dr. VICTOR ANACLETO GUERRERO
Presidente del Jurado



Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado



Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

A Dios, por brindarme salud, por darme entendimiento y así haber concluido este trabajo de investigación.

A mis padres, Ysolina y José; en agradecimiento a su esfuerzo, amor y apoyo incondicional brindado durante mi formación personal y profesional.

Agradecimiento

A mi asesor de tesis, por los conocimientos impartidos, y los consejos brindados.

Índice

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice	v
Índice de tablas	ix
Índice de ilustraciones	x
Resumen	xi
Abstract	xii
Introducción	13
Capítulo I.....	16
La metodología aplicada en la investigación	16
1.1. Descripción de la realidad problemática	16
1.2. El planteamiento del problema.....	17
1.3. La formulación del problema	18
1.4. Sobre la justificación de la investigación	18
1.5. Sobre la importancia de la investigación	19
1.6. Los objetivos de la investigación	19
1.6.1. El objetivo general	19
1.6.2. Los objetivos específicos	19
1.7. La hipótesis de la investigación.....	20
1.8. Las variables de la investigación.....	20

1.8.1. Sobre la variable independiente	20
1.8.2. Sobre la variable dependiente	20
1.9. Los métodos aplicados	20
1.9.1. El método exegético jurídico	21
1.9.2. El método sistemático jurídico	21
1.9.3. El método hipotético deductivo	22
1.9.4. El método inductivo.....	23
Capítulo II	24
La responsabilidad administrativa enfocada al servicio de las compañías de seguros	24
2.1. Trabajos previos a la investigación	24
2.2. La responsabilidad administrativa de personas naturales.....	28
2.3. La teoría de responsabilidad en las personas jurídicas	36
2.4. La responsabilidad civil enfocada al servicio de las compañías de seguros	38
Capítulo III	42
El principio de culpabilidad en la Ley de Procedimiento Administrativo General y su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador	42
3.1. La definición del principio de culpabilidad.....	43
3.2. La Ley de Procedimiento Administrativo y el principio de culpabilidad	45
3.3. El principio de culpabilidad en el procedimiento administrativo	

sancionador	47
3.4. Distinción entre la culpabilidad penal y administrativa	48
3.5. La responsabilidad administrativa de las compañías de seguros.....	50
Capítulo IV	53
Del análisis y los resultados	53
La necesidad de generar un esquema adecuado de sanciones por el incompleto servicio de protección indemnizatoria del SOAT	53
4.1. Los resultados del análisis de la eficacia indemnizatoria del SOAT	53
4.2. Los resultados de la validación de los expertos.....	62
Capítulo V	74
De la contrastación de la hipótesis	74
5.1. La discusión de los resultados	74
5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la teoría de la responsabilidad administrativa enfocada al servicio de las compañías de seguros”	74
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar el principio de culpabilidad en la Ley de Procedimiento Administrativo General y su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador”	77
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Observar el desempeño del cumplimiento de las aseguradoras respecto a la protección indemnizatoria del SOAT”	80
5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de generar	

un esquema adecuado de sanciones por el incompleto servicio de protección indemnizatoria del SOAT	83
5.2. La validación de las variables.....	86
5.2.1. Sobre la variable independiente: La incompleta protección indemnizatoria del SOAT	86
5.2.2. Sobre la variable dependiente: La responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad	87
Conclusiones	89
Recomendaciones.....	91
Bibliografía.....	93
Anexos.....	100
Cuestionario de encuesta para la validación de los expertos en derecho laboral.....	100

Índice de tablas

Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1”.	
.....	62
Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”.	
.....	64
Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 3”.	
.....	66
Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4”.	
.....	68
Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5”.	
.....	70
Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6”.	
.....	72

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1”	63
Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”	65
Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 3”	67
Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4”	69
Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5”	71
Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6”	73

Resumen

Desarrollar esta investigación respecto de la responsabilidad de las aseguradoras sobre la atención del SOAT que se adquiere y ejecuta ante un siniestro o accidente de tránsito está delimitada por la regulación correspondiente para evitar el abuso de derecho durante esta transacción; sin embargo la realidad permite evidenciar problemas que aún no se han logrado superar, tal es el caso de la forma o estructura de la ejecución, así, los requisitos exigidos resultan un tanto exagerados e innecesarios, al punto de que terminan acarreando problemas para los usuarios de este tipo de servicio. La perspectiva del análisis se basa en el procedimiento administrativo sancionador cuya estructura sanciona en la base objetiva de la legislación administrativa dentro de la cual se encuentra instaurada una posibilidad innovadora de la identificación de la responsabilidad administrativa de las entidades, la misma que se basa en el principio de culpabilidad incorporado en el procedimiento para dotar de un análisis subjetivo de la realidad, que para el caso estudiado bien podría calzar en la posibilidad ante la negligente estructuración de los requisitos que para efectos de ejecución resultan ser más una traba que una posibilidad de apoyo o adecuada protección a los usuarios de este servicio.

Palabras Claves: Indemnización, SOAT, Responsabilidad Administrativa, Culpabilidad.

Abstract

Carrying out this investigation regarding the responsibility of the insurers regarding the attention of the SOAT that is acquired and executed in the event of a traffic accident or accident is delimited by the corresponding regulation to avoid the abuse of rights during this transaction; However, reality shows problems that have not yet been overcome, such is the case of the form or structure of execution, thus, the requirements are somewhat exaggerated and unnecessary, to the point that they end up causing problems for users of this type of service. The perspective of the analysis is based on the administrative sanctioning procedure whose structure sanctions on the objective basis of the administrative legislation within which an innovative possibility of identifying the administrative responsibility of the entities is established, the same that is based on the guilt principle incorporated in the procedure to provide a subjective analysis of reality, which for the case studied could well fit the possibility due to the negligent structuring of the requirements that, for the purposes of execution, turn out to be more of a hindrance than a possibility of support or adequate protection for users of this service.

Key Words: Indemnification, SOAT, Administrative Responsibility, Guilt.

Introducción

Es necesario indicar que el origen de esta investigación se basa en la afectación de los consumidores que acuden a la ejecución de los seguros contra accidentes de tránsito y se encuentran con circunstancias de requisitos que se tornan en una pared o límite antes que un adecuado acceso a la protección que tiene por naturaleza este tipo de servicio, ante lo cual se precisa de observar la realidad con el fin de reconocer posibilidades de mejora u optimización de la acción indemnizatoria, esto es una respuesta más rápida de las acciones por parte de las empresas que se comprometen con este servicio.

Siendo por ello importante hacer el análisis jurídico de la forma en que se ha estructurado la ejecución de este tipo de servicios, en lo cual se ha podido encontrar rasgos de abuso de derecho llegando al límite de la desprotección, lo cual atenta contra la naturaleza jurídica y social del SOAT, por lo mismo que resulta necesario el análisis exegético de las reglas que participan tanto de manera directa cuanto indirecta sobre este tipo de transacciones, entiéndase a las reglas de INDECOPI cuanto a las que corresponden al procedimiento administrativo sancionador, así como la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Es en función a toda esta detallada situación de insatisfacción y condiciones que no permiten alcanzar los fines de idoneidad respecto de los servicios de indemnización que se han de brindar a través del SOAT como una garantía ante los accidentes de tránsito que se pudieran ocasionar, se ha considerado apropiado resumir el problema en una pregunta que es como sigue: ¿De qué manera puede

servir el razonamiento de la incompleta protección indemnizatoria del SOAT para determinar si existe responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad?

Tal cual se puede apreciar, el cuestionamiento planteado asume una cuestión o posibilidad que genera mayor presión sobre las compañías aseguradoras que brindan el servicio de SOAT, siendo así, se ha encontrado al principio de culpabilidad como una forma de generar responsabilidad de parte de estas empresas privadas, a fin de que cumplan de una manera directa con las acciones que permitan cubrir o resarcir los daños generados por los accidentes de tránsito, bajo las condiciones que exige la Ley.

En ese sentido es que se ha incorporado como planteamiento inicial, una afirmación que se basó en la realidad advertida de manera inicial, lo cual le da el carácter de hipótesis a priori, y se construye de la siguiente manera: Si, se advierte que la protección indemnizatoria del SOAT resulta incompleta en la fase de su ejecución; entonces, se estará produciendo el elemento necesario para determinar la responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad.

El Capítulo IV, se ha encargado de recopilar la información anterior para agruparla y construir el análisis de los resultados, así como el reconocimiento de los aspectos puntuales de la realidad como lo son el análisis estadístico respecto a las denuncias por acciones correspondientes a lograr una efectiva protección de las indemnizaciones que brindan las compañías de seguros, así como la recopilación de la opinión de los operadores jurídicos del distrito judicial de Lambayeque, con el fin de identificar el nivel de conocimiento sobre el tema así como la posibilidad de reforzar el planteamiento de la creación de una estructura proteccionista más

eficaz sobre los derechos fundamentales (derecho a la salud, a la vida y a la integridad) de los beneficiarios SOAT, con la intervención de INDECOPI como órgano de control y de las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Finalmente en el Capítulo V, se desarrolló la contrastación de la hipótesis que estuvo diseñada partiendo desde la discusión de cada uno de los objetivos específicos para luego consolidar con las tomas de postura, la validación de cada una de las variables que dieron origen a los capítulos, resultados que permitieron crear la hipótesis conclusiva que se contrastó con la inicial; siendo así se construyeron las Conclusiones y Recomendaciones que en esta ocasión se presentan al criterio evaluador del jurado de la tesis.

La Autora.

Capítulo I

La metodología aplicada en la investigación

1.1. Descripción de la realidad problemática

Tal cual corresponde a la ejecución de esta tesis, en lo que se refiere a la aplicación de la metodología de estudio desde la perspectiva jurídica, la descripción de la realidad problemática se ha de realizar en función a la construcción de dos aspectos básicos, como lo son el planteamiento del problema en primer lugar, en el cual se describen los aspectos que permitan evidenciar el problema desde los diferentes ámbitos que se relacionan con el derecho, así se tiene en primer lugar el problema desde un punto de vista social como base de la identificación de las razones para que el derecho intervenga a la mediación de este tipo de situaciones.

De otro lado se ubica también el aspecto legislativo, en el cual compete a esta investigación verificar cuan apropiada resulta la configuración del principio de culpabilidad en las reglas que se refieren a la responsabilidad administrativa incorporada en el ámbito legislativo de la Ley General de Procedimientos Administrativos, a fin de poder usarlo como fundamento para atribuir responsabilidad de las empresas aseguradoras que se ocupan de brindar el servicio de SOAT ante los accidentes de tránsito.

Luego de ello, la construcción de los aspectos indicados, se resume en un solo cuestionamiento con el fin de incorporar los aspectos más saltantes identificados como los componentes del problema, o tratándose de una investigación de tipo correlacional, serán incorporadas en dicha pregunta, las variables que mediante una relación causal originan la discusión del tema propuesto.

1.2. El planteamiento del problema

Surge esta proyección académica como una inquietud generada por la realidad evidenciada respecto a la forma en que se ejecutan los seguros correspondientes a la cobertura de accidentes de tránsito en nuestra nación, teniendo especial atención a la situación que se experimenta en la ciudad de Chiclayo, dada la experiencia laboral de la autora.

Sin duda alguna, la responsabilidad de las aseguradoras sobre la atención del SOAT que se adquiere y ejecuta ante un siniestro (accidente de tránsito), está delimitada por la regulación correspondiente para evitar el abuso de derecho durante esta transacción; sin embargo la realidad permite evidenciar problemas que aún no se han logrado superar, tal es el caso de la forma o estructura de la ejecución, así, los requisitos exigidos resultan un tanto exagerados e innecesarios, al punto de que terminan acarreando problemas para los usuarios de este tipo de servicio.

Tal servicio se entiende tiene la finalidad proteccionista ante eventos que califican como accidentes de tránsito, la cual según lo antes indicado no satisface de manera óptima a la víctima dado que resulta ser incompleta la protección indemnizatoria del SOAT, por lo mismo que tal afectación social se evidencia como una repercusión jurídica que se pretende tomar como eje de la investigación proyectada, reconociendo tal situación como la causal de responsabilidad por parte de las aseguradoras.

En tal situación se ha tenido en cuenta el procedimiento administrativo sancionador cuya estructura, sanciona en la base objetiva de la legislación administrativa dentro de la cual se encuentra instaurada una posibilidad innovadora de la identificación de la responsabilidad administrativa de las entidades, la misma

que se basa en el principio de culpabilidad incorporado en el procedimiento para dotar de un análisis subjetivo de la realidad, que para el caso estudiado bien podría calzar en la posibilidad ante la negligente estructuración de los requisitos que para efectos de ejecución resultan ser más una traba que una posibilidad de apoyo o adecuada protección a los usuarios de este servicio. Pese a la obligatoriedad de la ejecución que recae en las compañías de seguro.

1.3.La formulación del problema

¿De qué manera puede servir el razonamiento de la incompleta protección indemnizatoria del SOAT para determinar si existe responsabilidad jurídica de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad?

1.4. Sobre la justificación de la investigación

Cuando se promueve la presente investigación se hace en base a la justificación social que toma sentido desde la base de la afectación de los consumidores que acuden a la ejecución de los seguros contra accidentes de tránsito y se encuentran con circunstancias de requisitos que se tornan en una pared o límite antes que un adecuado acceso a la protección que tiene por naturaleza este tipo de servicio.

De otro lado se puede evidenciar una justificación legislativa en tanto que la forma en que se ha estructurado la ejecución de este tipo de servicios permite rasgos de abuso de derecho llegando al límite de la desprotección, lo cual atenta contra la naturaleza jurídica y social del SOAT, por lo mismo que resulta necesario el análisis exegético de las reglas que participan tanto de manera directa cuanto indirecta sobre este tipo de transacciones, entiéndase a las reglas de INDECOPI

cuanto a las que corresponden al procedimiento administrativo sancionador, así como la Ley de Procedimiento Administrativo General.

1.5.Sobre la importancia de la investigación

La investigación proyectada resulta de suma importancia puesto que con los resultados obtenidos materia de investigación se podrán identificar con exactitud los aspectos fallidos en la regla que se ocupa de la ejecución de los seguros contra accidentes de tránsito y su efectividad proteccionista, logrando con ello la posibilidad de construir una propuesta de cambio que permita la satisfacción de la población asegurada en tanto se tenga que proceder a la ejecución del SOAT.

Resulta también importante puesto que el desarrollo del análisis del principio de culpabilidad y su participación especial diseñada para el procedimiento administrativo sancionador permitirá recrear la forma en que se proyecta como posibilidad de solución para evitar el abuso de derecho cometido por parte de las aseguradoras en función a la regla establecida con la finalidad de alcanzar satisfacción a los consumidores de seguros (beneficiarios), logrando con todo ello una suerte de equilibrio entre los intereses de ambas partes.

1.6.Los objetivos de la investigación

1.6.1. El objetivo general

- Determinar si el razonamiento de la incompleta protección indemnizatoria del SOAT sirve como argumento jurídico para determinar la responsabilidad jurídica de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad.

1.6.2. Los objetivos específicos

- Desarrollar doctrinariamente la teoría de la responsabilidad administrativa enfocada al servicio de las compañías de seguros.

- Estudiar el principio de culpabilidad en la Ley de Procedimiento Administrativo General y su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador.
- Observar el desempeño del cumplimiento de las aseguradoras respecto a la protección indemnizatoria del SOAT
- Analizar la necesidad de generar un esquema adecuado de sanciones por el incompleto servicio de protección indemnizatoria del SOAT basado en el principio de culpabilidad.

1.7.La hipótesis de la investigación

Si, se advierte que la protección indemnizatoria del SOAT resulta incompleta en la fase de su ejecución; entonces, se estará produciendo el elemento necesario para determinar la responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad.

1.8.Las variables de la investigación

1.8.1. Sobre la variable independiente

La incompleta protección indemnizatoria del SOAT.

1.8.2. Sobre la variable dependiente

La responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad.

1.9.Los métodos aplicados

Conseguir los fines de la investigación requiere primero de cierta delimitación de la ruta a seguir lo cual está marcada previamente por la estructura metodológica que parte desde el planteamiento del problema hasta llegar a la hipótesis, sobre lo cual se han de aplicar los mecanismos necesarios para conseguir

alcanzar la meta, esto es la comprobación de la veracidad de la afirmación planteada inicialmente; es en ese momento donde intervienen las estrategias científicas conocidas como los métodos de la investigación, que para el sentido y tipo de investigación se han escogido aquellos que calcen con la finalidad jurídica que se proyecta.

1.9.1. El método exegético jurídico

En cuanto a lo que se refiere la aplicación de este método de investigación, se ha seleccionado en razón de que el análisis jurídico que se proyecta tiene relación con la interpretación de las reglas que operan sobre el control administrativo de las operaciones de las empresas aseguradoras que brindan el servicio del SOAT, ello con el fin de asegurar que sea de la manera más óptima posible, así la aplicación de este método permitió la interpretación literal de las reglas.

Esta observación directa permitió el reconocimiento del sentido gramatical que se torna como el primer paso en la ruta de la interpretación de la ley, así la connotación de la regulación de la SBS y la Ley General de Procedimientos Administrativos, orientarán el conocimiento más exacto del alcance de las reglas basado en la exégesis de forma independiente para luego contrastarla con el resto del ordenamiento jurídico lo cual ha correspondido al siguiente método.

1.9.2. El método sistemático jurídico

La secuencia del análisis interpretativo de las leyes requiere de una segunda fase que prosigue del reconocimiento literal o exegético si se quiere, de la misma regla, esto es la comprensión de la ley en su entorno jurídico, para reconocer cual es el papel que juega en el control social que se supone tiene por finalidad el derecho mismo, así la interrelación con el resto del ordenamiento jurídico parte desde la

identificación de su coincidencia con la regla máxima, esto es la Constitución Política, así resultará la identificación del sentido jurídico con el respeto de la jerarquía que ocupan los derechos fundamentales y su sentido garantista que ha de ocupar su atención para el resto del ordenamiento.

Luego de la verificación de la constitucionalidad de las reglas que se analizan, se proyectó la verificación de su encadenamiento con las normas de igual rango, así se revisó la coincidencia y utilidad de la estructura jurídica entre reglas como la Ley de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Ley General de Procedimientos Administrativos y la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador, en la búsqueda de la utilidad de su relación, la sintonía que permita evidenciar un correcto control en su operatividad respecto a las empresas prestadoras del servicio del Seguro contra Accidentes de Tránsito.

1.9.3. El método hipotético deductivo

Teniendo en cuenta que el análisis que promueve esta investigación se ha proyectado sobre determinadas reglas que se ocupan de manera general sobre el correcto funcionamiento a nivel administrativo de la estructura del Estado, se consideró prudente la incorporación de este tipo de método puesto que permitió la observación desde una perspectiva macro la gestación de las reglas de control administrativo para luego poder ubicarse en su efecto de manera específica.

Así, se consiguió mediante este método identificar el sentido general de la Ley de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como de la Ley General de Procedimientos Administrativos y la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador, perspectiva que se enfocará sobre el efecto específico que tiene con respecto a la correcta administración del servicio que denota la activación del seguro contra accidentes de tránsito, dada su condición obligatoria.

1.9.4. El método inductivo

Otra de las perspectivas importantes que se han contemplado en el esquema para el desarrollo de esta investigación se ubica en la aplicación del método inductivo que como bien se sabe inicia la observación desde un ámbito específico para alcanzar la verificación de lo general, así la comprensión de tal estrategia, se comprometió el examen hacia la revisión de la forma en que la Ley acomoda el actuar de las empresas aseguradoras que prestan el servicio del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito.

Se ha partido pues, desde la observación del sentido comercial que tiene este tipo de servicio para contrastarlo con el interés general que acompaña su sentido, puesto que pone en una misma mesa de estudio el interés social con el particular, así la estrategia inductiva permitió ver su alcance en función a la regla general, con lo cual se pudo analizar cuan necesaria resultaría la modificación o acomodo de las reglas generales que se ocupan de este tipo de servicio.

Capítulo II

La responsabilidad administrativa enfocada al servicio de las compañías de seguros

En función al esquema normativo que se ha estructurado respecto a la responsabilidad administrativa que corresponde a las personas jurídicas, es que se proyecta el razonamiento de que las empresas de seguros bajo su condición comercial pueden ser alcanzadas por este tipo de sanción en tanto se demuestre la relación con el principio de culpabilidad que generaría la idea de que el servicio incompleto del SOAT, representaría una de las causales para que se le otorgue tal sanción.

Por lo mismo que resulta necesario primero reconocer la teoría que se proyecta sobre esta posibilidad de aplicar este tipo de sanciones sobre las personas jurídicas que se ocupan de brindar el servicio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, por lo cual se ha tenido en consideración algunos antecedentes que se recogen desde la proyección de este tema y se plasman a continuación.

2.1. Trabajos previos a la investigación

La comprensión de la importancia de revisar este aspecto jurídico requiere de la revisión de ciertos trabajos previos que se hubieren ocupado de tal tema, como es el caso de la tesis desarrollada por el Abogado Héctor Fidel Rojas Rodríguez, en su Tesis para obtener el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en Derecho Penal, cuyo título es: *Los Principios Constitucionales Limitadores del Ius Puniendi ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador?*; el autor dentro del contenido de su tesis, específicamente en su Capítulo II, realiza un interesante desarrollo sobre la articulación entre las distintas manifestaciones del

derecho sancionador público sobre todo en referencia a la relación entre el Derecho Penal y el Administrativo Sancionador en el Perú.

(...) Afirmar la unidad entre el ilícito penal y el administrativo no conlleva a concluir que ambos deben diferenciarse por criterios cuantitativos. Al contrario, los parámetros numéricos o cuantitativos no son un criterio adecuado para diferenciar ambas clases de infracción. El fracaso de todo intento de diferenciación cuantitativa, es patente cuando se constata que en sede sancionadora extrapenal existen sanciones mucho más graves que en el Derecho Penal. Piénsese, en la inhabilitación de por vida que impone la no ratificación de magistrados por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, por citar apenas un ejemplo. (pág. 94)

Según lo referenciado por el autor, se puede entender una de las razones que sirven de argumento para la incorporación del principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador, así este fundamento ha de servir también para la sugerencia del análisis de la responsabilidad en base al principio de culpabilidad, en tanto aspecto subjetivo a fin de aplicar sanciones a las aseguradoras que brindan inadecuadamente el servicio de protección indemnizatoria respecto del SOAT.

Es tal vez innovadora la idea de recoger como principio a la culpabilidad en la regla que se ocupa del procedimiento administrativo sancionador basado a la marcación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, pues así lo indica el investigador Nieto (2012) respecto del Principio de Culpabilidad:

(...) En el derecho Administrativo sancionador opera el principio de culpabilidad en todas sus variantes, pero también hay supuestos de infracciones formales (o por simple, inobservancia) de

responsabilidad objetiva. Cuando la Ley es explícita al respecto, no hay dificultades pues a su regulación habrá que atenerse. El problema aparece cuando las leyes sectoriales nada dicen. (...). (págs. 348-349)

Es precisamente esta ausencia reguladora específica la que hace falta para la adecuada aplicación del principio de culpabilidad para el análisis de la responsabilidad que derive en una sanción administrativa, por lo mismo que esto justifica la realización de esta investigación que pretender reconocer a la aplicación de esta directriz con el fin de establecer adecuadamente la responsabilidad de las aseguradoras que brindan un servicio incompleto de la indemnización por el SOAT.

De acuerdo a la investigación desarrollada por Menéndez Menéndez, (2015) titulada “*La deficiente cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vulnera derechos constitucionales*” concluye de la siguiente manera:

Que se vulneran los derechos constitucionales a las personas víctimas de accidente de tránsito, en el monto de su indemnización. En otros países hay una mayor cobertura en casos de indemnizaciones económicas este es el caso de EE.UU. Se debe reformar el artículo 8 del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito con la finalidad de aumentar el monto de las indemnizaciones. (Menéndez Menéndez, 2015, pág. 105)

La perspectiva que se asume en la investigación citada esta orientada al monto de la cifra indemnizatoria, esta es otro aspecto que tiene que ver con el resultado de eficacia de la acción de este tipo de seguro contra accidentes de tránsito, esencial sin duda, pero el problema que se evidencia va mucho más allá, pues se ubica en el aspecto que tiene que ver con el acceso incluso a este tipo de

compensación que aún cuando fuera insuficiente, termina siendo nula si es que no se alcanza a tenerla.

Esto se vincula incluso con el hecho de que no exista suficiente conocimiento de la realidad respecto a los accidentes de tránsito no sólo a nivel de las autoridades que se ocuparán del acomodo de la regulación, sino también de parte de la ciudadanía, razón por la cual hoy en día la falta de conocimiento tanto de los conductores como de los peatones conlleva a tener un mayor número de accidentes de tránsito hecho que genera problemas al momento de realizar alguna indemnización.

También se toma en cuenta los aportes realizados por Chilón Salcedo, (2018) en su tesis titulada “*El Formato de Registro de Accidentes de Tránsito Efectiviza el Pago de la Indemnización en Lima Norte*” concluye que:

El SOAT, es un seguro de carácter social que cuenta con algunas características que validan su cobertura, tal como el interés asegurable (vida, integridad física, etc.), el precio del Seguro ocurrió el siniestro (AT); es decir, el FRAT cuenta con requisitos sine quanon que validan y garantizan su uso y emisión con el propósito de evitar adulteraciones. (Chilón Salcedo, 2018, pág. 52)

Se aprecia de esta investigación tomada como referencia, el hecho de que en la estructura normativa también se incorporan aspectos que tienen que ver con el sentido comercial que requiere necesariamente la empresa aseguradora para garantizar su existencia y conveniencia mercantil, por lo mismo que se incorporan ciertos requisitos, siendo uno de los aspectos justificantes el hecho de que se evite el falseamiento de las circunstancias que engloba la verificación de la ocurrencia del accidente.

Un aspecto sobre el cual esta proyección partirá para tomar como punto inicial del análisis de la regla, la estructura de acceso al sistema asistencial y desde luego al compensatorio, lo cual en su conjunto construyen el sentido proteccionista que se presume justifica la existencia del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito en nuestro país.

2.2. La responsabilidad administrativa de personas naturales

Se puede reconocer de la construcción de esta investigación que el principal objetivo es identificar la posibilidad de poder atribuir responsabilidad administrativa a las empresas aseguradoras del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, en tanto el carácter de protección adecuada no se cumpla con el rigor que corresponde a este tipo de siniestros, por lo mismo que se incluye en este capítulo la consignación de la teoría que reconoce en primer lugar la definición de esta figura jurídica para luego establecer sus efectos jurídicos en la realidad de los seguros

Respecto a lo que se ha de entender como definición de la responsabilidad administrativa, se puede apreciar como necesidad previa del entendimiento del término responsabilidad por lo mismo que se recurre a lo señalado por García Amado (2011) en su artículo titulado *Responsabilidad jurídica*, en el cual señala: “Cuando se habla de responsabilidad jurídica se hace referencia a la atribución a un sujeto de la responsabilidad por un daño que han padecido una persona (física o jurídica) o un bien jurídico”. (pág. 126)

Es clara la connotación de la definición de responsabilidad que se hace mención en la cita tomada, se aprecia pues la identificación de dicha responsabilidad lo cual tendrá como consecuencia necesaria una respuesta, siendo este reconocimiento en función a la observación de la producción de un perjuicio,

o como lo llama el autor “daño”, así la comprensión de la responsabilidad tiene una relación directa con el efecto que se produce por determinada acción.

Ha de entenderse entonces que la responsabilidad será el marcador de obligación que detenta aquel que produce el daño sobre determinada persona o bien, pero surge el cuestionamiento de cómo es que se ha de entender esta responsabilidad, podrá identificarse niveles de acción, o será la misma que se aplica en los diferentes campos del derecho; es decir, se puede indicar que la responsabilidad jurídica tiene el mismo accionar en los diferentes ámbitos del derecho, llámese derecho civil, penal, administrativo, comercial o aquellos en los que fuera identificada dicha relación entre la acción y el daño producido.

De acuerdo a lo reseñado por el investigador colombiano Vélez (2015) quien en su artículo jurídico titulado *La responsabilidad jurídica: aproximación al concepto, relación con otros conceptos jurídicos fundamentales y su funcionamiento*, en el cual hace un parafraseo del maestro Kelsen sobre la responsabilidad, diciendo:

Kelsen, por ejemplo, acepta que la responsabilidad jurídica es un concepto jurídico fundamental, esto es, una herramienta del entendimiento jurídico aplicable a cualquier ordenamiento jurídico y a cualquier rama de un ordenamiento jurídico. Sin embargo, no se ocupa en forma exhaustiva de definirla, sino más bien, como ya se vio, de explicar qué significa para él ser responsable jurídico. (pág. 140)

Con la cita tomada, se pueden medianamente responder algunas de los cuestionamientos antes planteados, básicamente se reconoce del maestro Kelsen la apreciación de que la responsabilidad se puede tomar desde cualquier ámbito del

derecho, en tanto y en cuanto se reconozca el sentido que ocupa la relación de correspondencia por entre el sujeto que ocasiona el daño y el afectado, lo cual sin duda genera alguna cuestión de obligación de vuelta.

El sentido entonces es reconocer el grado de responsabilidad identificando al sujeto que la produjo para que éste último se haga cargo de las obligaciones jurídicas que nacen de dicho evento; lo cual es posible entenderlo desde la perspectiva de la teoría que se refiere a la obligación que se presume como la acción esperada por parte de todas las personas, esto es lo que se supone todos deberíamos cumplir.

Luego de lo recopilado se puede entender que la responsabilidad tiene por correspondencia una naturaleza de corte legal y por su origen también se puede asumir que tiene un aspecto moral en tanto su reconocimiento directo por parte del propio responsable tiene relación directa con la costumbre; luego corresponde comprenderla como aquella acción que no puede ser separada de lo que se entiende como las funciones en el ámbito público, así como lo que corresponde al sector privado.

Conforme a lo que se ha podido ubicar en la doctrina se reconocen cuando menos una trilogía de tipos de responsabilidad, así se tiene en primer lugar a la conocida como civil, que se puede comprender como derivada de los principios que operan como generales de la ciencia jurídica, esto es como la correspondencia de que toda persona que provoca un perjuicio hacia otra persona está en la obligación de respetarlo, esto es asumirla como su acción y las consecuencias; en un segundo lugar se encuentra la llamada responsabilidad penal que será la que se concibe como la consecuencia de las acciones que van en contra de las reglas penales que tipifican acciones específicas como ilegales, lo cual trae como consecuencia el hecho de que

el Estado aplique sanciones como penas como una respuesta a la criminalidad, lo cual debe estar especificado en la propia ley penal o las reglas que se ocupan en forma específica de ello; en tercer y último lugar se ubica la responsabilidad de tipo administrativo que se puede colegir como aquella que surge como una cuestión de faltas que se han producido en el ámbito del derecho laboral en lo que corresponde a las acciones del trabajo, de acuerdo a la legislación específica y los reglamentos que se ocupen del control administrativo en ese ámbito. (Dermisaky Peredo, 2012, pág. 4)

Según la última indicación el concepto de la responsabilidad en el ámbito administrativo se tendría que supeditar sólo a lo que se refiere al aspecto laboral, lo cual podría tener cierta relación con la actividad administrativa que corresponde a la función pública, en tanto que se trata del control de las actividades encomendadas en base a la confianza en el funcionario, así pues según se indica que el fin de este tipo de responsabilidad sería: “(...) velar por el estricto y cabal cumplimiento del régimen de deberes aplicable al personal de la Administración del Estado, y mantener la disciplina en el marco del desempeño de las funciones públicas”. (Monteros Cartes, 1999, pág. 8)

Ello comprendido en el ámbito público se desempeña como una estrategia de parte del Estado para ejercer control sobre el manejo de la administración pública, con relación a la forma en que se desempeñan los funcionarios, toda vez que de ello se tendrá como consecuencia el logro del correcto funcionamiento, evitar actos que contravengan la confianza que se deposita en ellos, lo cual se comporta como una acción que procura el bienestar de la colectividad mediante el cuidado de sus intereses.

En ese sentido, la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria busca evitar la arbitrariedad de tales trabajadores. Asimismo, como indica Maria Jalvo dicha responsabilidad tiene una situación jurídica activa representada por el poder disciplinario, pilar fundamental sobre el cual reposa la organización de las entidades públicas. Entonces, para lograr la concreción de la responsabilidad administrativa disciplinaria y del poder disciplinario de las entidades públicas, se requiere de un procedimiento que tenga por objeto determinar si es que el trabajador estatal observó las conductas establecidas por el ordenamiento que se constituirá como el método de control de la arbitrariedad de los trabajadores estatales. (Díaz Roncal, 2016, pág. 2)

Teniendo en cuenta que al ámbito de aplicación del concepto general de la responsabilidad en este acápite está enfocado a la que se manifiesta en el ámbito público, no debe dejarse de lado el hecho de que el privado representa también una forma de control, básicamente en este último es donde se encuentra una estructura mucho más eficaz en el control de la administración pública, lo cual invita a pensar que esta diferencia puede ser el origen del problema de fiscalización.

Así pues las empresas prestadoras del servicio de seguros han de ser fiscalizadas en la ejecución de la obligaciones que han comprometido a ejecutar al momento del siniestro, parte de ello es la contemplación de aspectos relacionados con la estructura del trámite; entonces al corresponder dicha labor de control a una institución estatal, deberá asumirse el hecho de que la presencia de circunstancias de corrupción dejará abierta la puerta a posibilidades de malos manejos, esto es que el funcionario público a cargo no desempeñe correctamente el rol que le ha sido encomendado por el Estado.

Ello traería como consecuencia el hecho de que la acción fiscalizadora sobre las empresas que prestan el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, no sea lo suficientemente eficaz, generando con ello un perjuicio a quien contrata el servicio, más aun teniendo en cuenta que la afectación del bien jurídico vida agrava la situación, ampliando el rango de aplicación de la responsabilidad.

Es en este campo donde aparece la acción del derecho administrativo sancionador, así pues la estructura del derecho administrativo, requiere de la aplicación de sanciones para crear un ámbito de cuidado en tanto coacciona al funcionario así como al administrado para el control de la actividad administrativa, buscando que las actividades que se relacionan con el ámbito público del control sean correctamente desarrolladas.

Es importante tener en cuenta que esta acción sancionadora tiene cierta característica, así se indica que: “La responsabilidad en derecho administrativo sancionador es en su esencia de criterio objetivo, y parte de que lo que determina la responsabilidad del administrativo es la comisión misma del acto (...)”. (Obiol Anaya, 20018, pág. 12); por ello es que se la aplicación de las sanciones que se determinan son como una mera correspondencia de los actos, una cuestión de cálculo sin un razonamiento previo para que se establezca de manera adecuada y motivada el sentido de la responsabilidad.

Sobre ello es que se ha planteado el cambio de dicho carácter objetivo pues resulta imperioso, según lo indica un sector de la doctrina, el hecho de que se precise de una evaluación previa del acto administrativo para reconocer las características que lo pudieran llevar a la calificación de grave que conlleve a la sanción administrativa; ello es importante en tanto que se estaría evaluando el carácter subjetivo de la acción, tal vez con ello se estaría aplicando de una forma más

equitativa o justa, aspecto que se tratará más adelante al momento de revisar el principio de culpabilidad en este tipo de procedimiento.

Es de acuerdo a ello que se podría reconocer en su momento el hecho de que existiría responsabilidad de las aseguradoras ante el reconocimiento del incumplimiento del carácter proteccionista de los seguros contra accidentes de tránsito, esto es la ausencia de cuidado para que la asistencia y la indemnización se produzca como se establece en la regla, siendo así, el resultado deberá marcar la necesidad de un acomodo legislativo, tarea que se podrá complementar al final de la investigación.

En principio, aun en el campo de la verificación del concepto de la responsabilidad, haría falta más bien entender cómo funciona este reconocimiento de la responsabilidad, por lo cual se hace preciso ubicar dos aspectos importantes, lo que se denomina límite como aquella marcación que siendo superada constituye vulneración de algo siendo el resultado de ello la producción de un daño, aquel del que se habla en el concepto de responsabilidad.

Los límites en el derecho se vinculan siempre a los derechos que constituyen las libertades, por lo mismo que se puede decir que ambos conceptos están ligados bajo una conexión de dependencia, así pues lo da a entender el Dr. Romero Jouvín (2016) quien en su artículo jurídico titulado *Los límites del derecho*, menciona que: “El verdadero problema de los límites está dado en el ámbito de lo intangible. Esta dado básicamente en el campo de la moral, en el campo de las libertades, y , por ende, en el campo del derecho. (...). (pág. 50)

En una primera apreciación se debe comentar el hecho de que se consigna a los límites como un asunto relacionado con el ámbito moral, pues está claro que la moral tiene una relación estrecha con el derecho mismo puesto que es en sí una

cuestión moral que revestida del manto de la regla con el carácter de exigibilidad se proyecta a su cumplimiento en la sociedad, así pues el derecho observa ese sentido por ello es que los límites operan en el derecho como los marcadores de la moral, los puntos hasta donde el actuar humano puede llegar con la permisibilidad que le otorga el propio hombre como generador del poder a través del Estado.

Ello inicia su ejecución en la base del reconocimiento de las libertades que la propia moral a través del derecho otorga al ser humano y que con la evolución social del derecho relacionado con otras áreas se ha extendido hacia lo que se reconoce como otro tipo de sujetos en el ámbito jurídico, esto es las personas jurídicas, con ciertas restricciones desde luego.

Es así pues que la responsabilidad opera precisamente sobre estos límites, buscando el establecimiento de un control más adecuado de la actuación del Estado al momento de ejercer control social, por ello resulta importante comprender como se mueven en el ámbito jurídico estas libertades y cuáles son los límites que las marcan para poder reconocer adecuadamente la responsabilidad en sus distintos niveles.

La propia Ley es la que marca los límites, así para el caso estudiado de las aseguradoras que brindan el servicio de SOAT, corresponderá ese papel a las reglas que se ocupan de este tipo de actividad, comprendiéndose desde luego a la propia SBS y la Ley de Procedimiento Administrativo General en primer lugar para reconocer cuál es el ámbito de permisibilidad y exigibilidad respecto al cumplimiento de sus funciones para luego ante la identificación de ello reconocer la presencia de la responsabilidad.

2.3. La teoría de responsabilidad en las personas jurídicas

Dado que la investigación hace una crítica que se relaciona con la responsabilidad de las empresas prestadoras del servicio SOAT, es preciso detallar el sentido de tal condición toda vez que estas empresas son personas jurídicas, a fin de comprender la forma en que se controla este tipo de actividades que salen del marco de la legalidad y que son sancionadas por el Estado.

El razonamiento debe partir desde la percepción del sujeto de derecho que se comprende en la estructura del Estado como el principal elemento al cual se le atribuye derechos y deberes, siendo el ente que ocupa la atención proteccionista que inspira la Constitución, así estos reciben la nominación de sujetos de derecho, los mismos que pueden ser: “las personas individuales y las personas colectivas. Se trata en el primer caso de sujetos individuales, en el segundo caso de sujetos colectivos”. (Alzamora Valdez, 1987, pág. 128)

Una definición bastante práctica y sencilla que sirve para encontrar la diferenciación cuántica de lo que se entiende por persona de tipo natural y la otra que se conoce como persona jurídica, que debe asumirse como el grupo que se incorpora en una sola institución con el fin de adquirir personalidad jurídica, ser titular de derechos, puesto que se desenvuelve en un entorno de legalidad, así pues: “La persona jurídica, en su calidad de sujeto de derecho está integrada por ser humanos, interactuando con valores y normas jurídicas”. (Fernández Sessarego, 2015, pág. 73)

Tal cual lo señalado, las personas jurídicas pueden asumir obligaciones, cumplir con deberes, por lo mismo que se puede comprender el hecho de que también resulten responsables por el desarrollo de las actividades que se producen en el quehacer para el fueron creadas, así esta condición de responsabilidad debe

ser regulada, como así sucede en el ordenamiento civil, esto es en lo que respecta a la circunstancia de las obligaciones que en tanto celebración de contratos requiere de cierta garantía para poder desarrollarse, pero que para esta ciencia incluso no resulta nada sencillo pues: “(...) el resarcimiento del daño contractual es considerado un tema especialmente complejo y la materia ostenta un trasfondo noble, aunque verdaderamente intrincado (...). (Alpa, 2015, pág. 195)

Queda claro que la responsabilidad tiene una relación directa con el resarcimiento puesto que para que éste se produzca primero tendrá que identificarse la responsabilidad, que para este caso es la cuestión de la persona jurídica, siendo esto importante para el tema de la investigación que se desarrolla, toda vez que el incumplimiento o entorpecimiento de la función del SOAT, terminará causando un perjuicio que acarreará luego de la identificación de la responsabilidad, el consecuente resarcimiento que será de cargo de la empresa aseguradora.

Para este tipo de circunstancias ha sido incorporada al ámbito jurídico del derecho administrativo la potestad sancionadora que tiene el Estado, esto es el *ius puniendi*, con el fin de establecer el control de la actividad tanto en el ámbito privado cuanto en el público, así ello comprenderá también a la observación de los actos que son producidos por las personas jurídicas, puesto que: “El derecho administrativo sancionador está presente en la interrelación cotidiana del Estado con sus administrados, es decir, aparece en cada sector de la vida diaria en que el Estado tiene presencia o interviene para regular dicha actividad (...)”. (Rojas Rodríguez, 2015, pág. 67)

Para el caso de la actividad que representa la relación producida por el contrato de un seguro vehicular obligatorio como es el SOAT, implica que el cumplimiento de toda la actividad a nivel privado deba desarrollarse en atención a

las pautas que establecen el ordenamiento jurídico para tal fin, ante lo cual la identificación de actos que salen de estos lineamientos o entorpecen el cumplimiento de la finalidad serán susceptibles de la fiscalización del Estado primero y la posterior sanción administrativa que corresponde a las personas jurídicas en tanto se reconozca la responsabilidad.

2.4. La responsabilidad civil enfocada al servicio de las compañías de seguros

Tal cual se ha reseñado en el acápite anterior, la responsabilidad como concepto puede ser aplicado en las distintas áreas del derecho, así para el caso que ocupa a esta investigación, se tomará en cuenta el sentido que se le otorga desde el ámbito civil, para lo cual se trae a colación lo señalado por los doctores Osterling Parodi y Castillo Freyre (2003), quienes sostienen que “(...)en el derecho ilustrado, al menos desde el siglo XIII, figuraba la palabra “responsable”, la misma que se tornó bastante habitual bajo el Antiguo Régimen por intermedio de responsum, que deriva de respondere, el mismo que significa “estar obligado” (pág. 195).

Tal percepción deja en evidencia la relación directa entre el carácter inicial de la obligación de actuar bajo determinado lineamiento, parámetros que existen en función a las reglas específicas, por lo cual el comportamiento alejado de ello implica una consecuencia que se refiere a la responsabilidad, es decir las personas, por sus actos, quedaban sujetas a una obligación del cual era responsable de cumplir.

De otro lado se ha de tener en cuenta que el termino responsabilidad es definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2018), como la: “deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal” (pág. 267). Esta definición, es de suma importancia, pues define a la responsabilidad como aquella

obligación contraída por una persona que, por su culpa, ha causado en otro algún daño, buscando de esta forma expiar sus actos y satisfacer de algún modo a la víctima de estos daños.

Es así que la responsabilidad, requiere la existencia de un conflicto entre dos o más personas, en el cual, una de ellas, es responsable de reparar el daño ocasionado a la otra que vendría a ser la víctima; quien podrá exigir el resarcimiento de los daños causados haciendo uso de los instrumentos legales. Esto significa que para estar ante el supuesto de responsabilidad resulta suficiente la existencia de la víctima y el daño.

Por su parte el doctor Torres Vásquez (2008), define a la responsabilidad civil señalando que: “Es el conjunto de consecuencias de una acción u omisión ilícitas, que derivan una obligación de satisfacer el daño a la pérdida causada” (...). (pág. 674), lo indicado puede entenderse como la obligación que nace del incumplimiento de otra obligación, pues en lo que se refiere al contrato del seguro SOAT, implica el compromiso de la cobertura de los gastos además de la indemnización, en ese sentido el incumplimiento o entorpecimiento de este fin acarrearía una nueva obligación, pero que tiene por medio la fiscalización del Estado, para el reconocimiento de la responsabilidad y la sanción respectiva.

Toda esta construcción de la determinación de la responsabilidad civil tiene que ver con el hecho de que las personas naturales o jurídicas en tanto sujetos de derecho son capaces, esto implica pues el discernimiento para decidir qué acciones ha de realizar y que se entiende éstas deban estar ajustadas a las reglas que incorpora el ordenamiento jurídico; se habla entonces de la razón que le corresponde asumir a cada sujeto de lo que parte la identificación del compromiso, el cual es el sentido de las obligaciones.

Esta capacidad tiene que ver también con el hecho de que el sujeto en tanto capaz de discernimiento, podrá conocer cuando alguna acción cae en el ámbito de lo restringido convirtiendo a la acción en culpable, siendo esto en lo que se basa la comprensión de dicho principio ahora recogido en el ordenamiento administrativo y que se estudiará en el siguiente capítulo, para reconocer la posibilidad de que sea aplicada a la comprensión de la responsabilidad de las personas jurídicas como son las aseguradoras.

La responsabilidad civil consiste, asumir la obligación de resarcir un daño ocasionado en una persona derivado de los actos u omisiones en los que haya incurrido aquel que tenía el deber cumplir un acuerdo; pues a través de esta institución se buscará justificar el actuar, asumiendo las consecuencias del daño ocasionado; si bien no se repara el daño ocasionado en su totalidad, pero de alguna forma buscará menguar los conflictos que se inicien a raíz de su actuar, ya sea por la inobservancia de las normas jurídicas existentes.

Esta situación del control de la actividad de las personas jurídicas para comprenderlas dentro del ámbito de la licitud, procurando que la acción del Estado para promover la seguridad jurídica, así lo indica el doctor León Hilario (2017), quien al referirse a las garantía que otorgan, señala: “(...) Las normas de la responsabilidad civil garantizan, pues, la integridad de las situaciones jurídicas, al determinar que, en presencia de determinados criterios de imputación, los perjuicios causados sean asumidos y resarcidos por alguien” (pág. 145).

Lo recogido por el doctor consiste en hacer responsable a aquella persona que por su actuar haya ocasionado algún perjuicio a otra, garantizando el correcto funcionamiento del derecho, pues nuestro ordenamiento jurídico regula la responsabilidad civil como una disciplina que garantiza el cumplimiento de las

consecuencias derivada de actos ilícitos. Lo que se busca con esta institución de la responsabilidad civil es el resarcimiento por el daño causado, así como determinar que aquella persona que fue la causante del hecho sea más cuidadoso con sus actuaciones en un futuro para así evitar conflictos en la sociedad.

Capítulo III

El principio de culpabilidad en la Ley de Procedimiento Administrativo General y su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador

La creación de las reglas que forman en su conjunto al derecho en sí, tiene por finalidad conseguir el equilibrio social a través del control que ejerce la supervisión, así como la delimitación de los senderos por donde habrá de discurrir la conducta humana, tal cual se ha indicado en el capítulo anterior, toda esta estructura está basada principalmente en dos acepciones generales como son la libertad y los límites a ella.

En el ejercicio del control del que se habla, se han desarrollado muchos esfuerzos por conseguir eficacia en la aplicación de la regla, para el caso específico del derecho administrativo se aprecia un esfuerzo jurídico para conseguir la tan ansiada eficacia en el control, siendo así la primera lucha por librar es el carácter práctico de la aplicación del derecho administrativo, esto es que su ejecución es objetiva, no requiere de mayor examen más que la verificación de circunstancias o requisitos que permitan evidenciar la condición y, para el caso de las sanciones, aplicar el castigo que corresponde.

En esa lucha, el derecho administrativo ha conseguido incorporar ciertos principios en la estructura de verificación de la responsabilidad, así siendo el más importante o el que llama la atención es el principio de culpabilidad, que sale un poco del tono objetivo, llevando al derecho administrativo hacia el ámbito de análisis desde un punto de vista interno del infractor; precisamente este aspecto es el que se pretende verificar en el campo de la ejecución de los seguros contra accidentes de tránsito que promueve esta investigación.

En ese sentido será importante tener una aproximación teórica a lo que corresponde la comprensión del principio tratado en este tema, para luego ubicar la justificación jurídica válida que permita reconocer su utilidad en el esquema de control administrativo y luego su efecto sobre la eficacia en la aplicación de las sanciones en este rubro de acción estatal.

3.1. La definición del principio de culpabilidad

Dar inicio a la búsqueda de la definición más apropiada para el principio de culpabilidad, siempre va orientar la observación partiendo desde el ámbito del derecho en el cual tiene mayor repercusión o utilidad, así pues en el Derecho Penal, puede partir de la idea de considerarlo como aquel lineamiento que permite determinar la responsabilidad de un sujeto a través del dolo o culpa en la comisión de un hecho delictivo.

Aun cuando el sentido de la investigación actual este orientado al ámbito administrativo, ha de tenerse en cuenta su concepción desde este aspecto en el que se ha desarrollado ampliamente con el fin de reconocer su verdadera acepción y su relación con la responsabilidad de la cual ya se habló anteriormente.

Desde la perspectiva penal, que es el ámbito donde la doctrina más lo desarrolla, se ha de tener en cuenta lo mencionado por el penalista García Caveró (2003) en su obra *Derecho Económico. Parte General*, donde señala sobre la Culpabilidad: “(...) en la culpabilidad solo debe tenerse en cuenta los aspectos que permiten la imputación personal, es decir, la posibilidad de atribuir a una persona el rol sobre el que se ha realizado provisionalmente la imputación del hecho”. (pág. 652)

De acuerdo a ello se aprecian dos aspectos claros que van ligados al concepto de culpabilidad, primero el hecho de la culpabilidad forma parte del injusto o hecho delictivo que comete o se le atribuye al sujeto, por lo que no puede desligarse de esta estructura su conceptualización y segundo que la culpabilidad representa o engloba lo referido a la imputación personal, que es básicamente el lograr atribuir responsabilidad dentro de la comisión de un delito.

Se trata entonces de la atribución de un rol que desde luego está relacionado con la condición de autor del hecho que se identifica como contrario al ordenamiento jurídico, por lo tanto, injusto puesto que ha causado un daño, siendo este último el móvil que proyecta el derecho para que se ejecute el carácter protector del control, así pues, la determinación de la responsabilidad sobre este perjuicio provoca la adquisición de la obligación de repararlo.

Para el caso específico que atañe a la aplicación del principio en base a esta conjetura haría falta entender la manera en que se produce, teniendo en cuenta que se logrará con ello el reconocimiento de la responsabilidad, así pues, la culpabilidad como principio requiere de un examen de la acción que se percibe como contraria al ordenamiento jurídico, evaluación que incluye un aspecto subjetivo del sujeto que permita evidenciar el nivel de intención.

Desde un punto de vista más dogmático se debería tener en cuenta lo señalado por el investigador Nieto Martín (2009) quien señala: “(...) La categoría dogmática de la culpabilidad, (...), ha de entenderse, por tanto, como el conjunto de garantías que legitiman al Estado a imputar personalmente el hecho e imponer una sanción al autor de un comportamiento antijurídico”. (pág. 217); esta percepción sin duda alguna tiene un enlace con el aspecto de control constitucional de las reglas.

El sentido garantista que se plasma en la cita tomada de Nieto, permite hacer el razonamiento de que la culpabilidad como principio, que de hecho tiene arraigo constitucional, tiene una función de seguridad jurídica, la misma que adopta un carácter mucho más trascendental en el ámbito penal, puesto que lo que se pone en juego con la aplicación de la sanción correspondiente es un bien muy valioso como la Libertad del sujeto que es identificado como responsable.

Este sentido para el ámbito administrativo no necesariamente tendrá este nivel de efecto, pero si resulta de vital importancia desde la búsqueda de la seguridad jurídica que se presume esta imbuida en todo el ordenamiento jurídico, lo cual, con una aplicación directa, objetiva de la sanción, como se hace en el derecho administrativo sancionador, no reviste de esta característica al control estatal.

3.2. La Ley de Procedimiento Administrativo y el principio de culpabilidad

El principio de personalidad de las penas implica que únicamente pueden ser sancionados quienes hubieran realizado la conducta infractora, dado que en derecho administrativo sancionador es imposible disociar autoría y responsabilidad. Por tanto, este principio excluirá la posibilidad de que se imponga sanciones subsidiarias, en las cuales un sujeto (el responsable) responda por otro (el infractor). Solo cabe imponer una sanción si se entiende que el “responsable” es coautor de la infracción o se considera que ha cometido a su vez otra infracción, tipificada como tal por el ordenamiento jurídico. (Baca Oneto, 2019, págs. 18-19)

Fundamenta asimismo su postura en que el principio de culpabilidad, se deriva del principio según “no hay pena sin dolo o culpa”, lo cual exige que el actor haya actuado con voluntad de afectar los bienes jurídicos. En conclusión, siendo aquel principio garantía y límite al poder punitivo, cualquier interpretación de las

normas en el sentido contrario, es decir, que permitan la responsabilidad objetiva en materia penal, sería inconstitucional. (Rojas Montes, 2017, pág. 5)

Pese a las divergencias que se derivan de la aplicación de los principios de uno a otro orden, por las características propias de ambos ámbitos, ello no impide que el concepto propio de culpabilidad no opere en el contexto administrativo, pues como lo dispone el artículo 29 de nuestra constitución, la máxima de culpabilidad tiene plena vigencia en las actuaciones administrativas: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. (...) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. (Ramírez Torrado, 2008, pág. 5)

Por su parte, resulta de capital importancia el reconocimiento que se ha hecho por nuestra jurisprudencia constitucional y administrativa del principio de culpabilidad, no sólo por lo que implica respecto del reproche que se puede hacer al autor de una infracción administrativa, sino porque del mismo es posible derivar otros principios que son muy relevantes, como la proporcionalidad de las sanciones y el carácter personal de la responsabilidad administrativa. A su vez, la jurisprudencia ha enriquecido el régimen común de las sanciones administrativas no sólo con su sometimiento al estatuto constitucional de las penas (legalidad, tipicidad, irretroactividad “in peius”, culpabilidad), sino también aquello que son fundamentos del Derecho penal en su conjunto, como sucede con el “non bis in ídem”, y la prescriptibilidad. (Cordero Quinzacara, 2014, pág. 39)

3.3. El principio de culpabilidad en el procedimiento administrativo sancionador

Aceptando este planteamiento, al ver que las personas jurídicas si son responsables de las infracciones, algunos autores tendieron a concluir que en Derecho Administrativo sancionador no rigen los principios de personalidad y de culpabilidad o, por lo menos, que tienen una enorme excepción respecto a las personas jurídicas. Eso supondría una diferencia radical entre Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador, entre el delito y la infracción administrativa: aquel sería acción culpable; esta ni es acción en sentido estricto ni es verdaderamente culpable. No al menos, cuando de las personas jurídicas se trata. (Rebollo Puig, 2016, pág. 4)

Reiteradamente, he sostenido que el Derecho Administrativo Sancionador es una rama autónoma del Derecho, que tiene su “anclaje” en el Derecho Público, en específico en el Derecho Administrativo, con lo cual he querido poner de relieve la finalidad prioritaria que singulariza a esta rama del Derecho, cual es, la protección del interés público, sin perjuicio de otras secundarias como, por ejemplo, dotar de garantías al perseguido. (Cordero, 2008, pág. 6)

El derecho Administrativo Sancionador es, ante todo, de índole administrativa, siendo lo sancionador una rama la misma, por lo que la aplicación de principios básicos del Derecho Penal debe estar orientado a garantizar derechos fundamentales de la persona, de lo cual debe entenderse que no existe una relación de subordinación del Derecho Administrativo hacia el Derecho Penal, sino que

ambos se encuentra en un mismo plano, siendo su única diferencia el grado de desarrollo alcanzado en materia sancionadora por el segundo. El procedimiento administrativo sancionador es por completo escrito, lo cual hace la conformación de un expediente donde se constaten todas las actuaciones realizadas tanto por la Administración como por el sujeto investigado y mediante el cual se pueda comprobar la existencia o no del hecho atribuido, a fin de determinar la responsabilidad correspondiente. (Vargas López, 1999, págs. 1-2)

“... si bien la potestad de dictar sanciones administrativas al igual que la potestad de imponer sanciones penales, derivan del ius puniendi del Estado, no equiparse ambas, dado que no solo las sanciones penales son distintas a las administrativas, sino que los fines en cada caso son distintos (reeducación y reinserción social en el caso de las sanciones penales y represiva en el caso de las administrativas). A ello hay que agregar que, en el caso del Derecho Administrativo sancionador, la intervención Jurisdiccional es posterior, a través del proceso contencioso administrativo o del proceso de amparo, según corresponda...” (Cárcamo Seminario, 2018, pág. 65)

3.4. Distinción entre la culpabilidad penal y administrativa

Una vez hecho el análisis de las distintas posiciones que intentan explicar la relación entre los delitos y las infracciones administrativas, se llega a una suerte de callejón sin salida que enfrenta las posiciones dogmáticas y la Constitución. Por una parte, las tesis de la separación sustancial entre unas y otras demuestran evidentes falencias cuando nos encontramos con tipos penales que en su estructuray fin no guardan mayores diferencias con las infracciones administrativas, especialmente aquellas que se construyen en el ámbito del medio ambiente, la

salubridad pública o en materia urbanística, bajo formas de peligro abstracto. A su vez, las tesis formalistas tampoco resuelven de forma definitiva el problema, porque una explicación centrada únicamente en la autoridad que debe aplicar la sanción o en la cuántica o gravedad de la misma, no dejar de plantear serios reparos, especialmente respecto de los límites que tendría el legislador en esta materia. (Cordero Quinzacara, El derecho administrativo sancionador y su relacion con el derecho penal, 2012, págs. 17-18)

A partir de esta matización de principios se ha venido construyendo la principiología del derecho administrativo sancionador, modulando principios ya solidos bien en el derecho penal o el administrativo, como los de legalidad, nom bis ídem y la proscripción de la analogía in peius. Es precisamente esta modulación de principios la que hace imperiosa la necesidad de precisar la identidad que existe entre ambos órdenes normativos sancionadores, y las diferencias que le dan autonomía a cada uno respecto al otro. (Merlano Sierra, 2008, pág. 8)

“En definitiva, la diferencia entre las infracciones y las sanciones penales y administrativas está dada por el derecho positivo”. Modernamente se ha abierto camino, al lado del Derecho penal, la estructuración y delimitación del “Derecho Administrativo sancionador”. En efecto, ambas estructuras jurídicas serian ramificaciones de un género común o supra-concepto que es el poder punitivo del Estado, hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido tanto por técnicas administrativas como penales. La doctrina entiende que deberían aplicarse al derecho administrativo sancionador, los principios del derecho penal. (González Bianchi, 2019, pág. 15)

Finalmente, la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas en el área administrativa ha constituido una de las principales diferencias entre los grandes sistemas punitivos, al menos en el Derecho Continental. Tal diferencia constituye, para algún sector de la doctrina, una contradicción contra el principio de culpabilidad, en tanto se impone sanciones a una ficción, es decir, un ente ficticio carente de cuerpo y, por ende, incapaz de manifestarse por medio de acciones, igualmente carentes de voluntad, por ello, de intención o capacidad de diligencia, resultando imposible exigir la comprensión de su antijuricidad. (Aguilar A, 2017, pág. 2)

3.5. La responsabilidad administrativa de las compañías de seguros

La responsabilidad civil, que implica finalmente asignar a determinada persona la asunción de un pago indemnizatorio como consecuencia de un daño o perjuicio generado, sea en el ámbito contractual o extracontractual, demanda con relación a dicha persona que se cumpla lo que bien puede denominarse como elementos o presupuestos consecutivos, siendo que la ausencia de uno solo de ellos es más que suficiente para que no se genere finalmente la referida obligación legal (heterónoma) de indemnizar. (Ortega Piana, 2011, pág. 2)

En este caso, según el artículo 105 de la Ley, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado de su deber de pagar a un tercero, en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho dañoso acaecido en el plazo convenido. Ahora bien, se considera que existe siniestro cuando surge la deuda de responsabilidad para el asegurado. Respecto a la indemnización de este tipo de seguro, el artículo 109 de la Ley dispone “Para

indemnizar los siniestros no se requerirá de sentencia firme al realizar la aseguradora una transacción sobre el monto de la indemnización antes o durante el proceso judicial”. De esta manera no será necesario esperar la conclusión de un proceso judicial para solicitar la indemnización prevista en el seguro de responsabilidad civil, cuyo contenido de cobertura se encuentra descrito en el artículo 107 de la Ley. (Martínez Ventura, Alfaro Rosas, Bossio Bossio, Guillén Lazo, & Tomanguillo Vásquez, 2014, pág. 6)

El de problema de la defensa jurídica del asegurado, y de la tramitación y liquidación de los siniestros de la Administración Pública, parece que ha encontrado una buena solución en la Comisión de Seguimiento que opera en los expedientes administrativos en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública Sanitaria. Pese a ello, el trabajo expone algunas objeciones prácticas que avalan que la regulación actual del procedimiento administrativo conlleva que el seguro pierda su utilidad como técnica para facilitar la gestión y liquidación de los siniestros. (Arquillo Colet, 2004, pág. 2)

Las nuevas legislaciones consagran atención a este ramo particularmente complejo de seguro, tratando fundamentalmente de precisar reglas respecto de su naturaleza y del ejercicio del derecho de defensa. Como ya es tradicional, destacan la naturaleza del seguro como dirigido fundamentalmente al pago de la indemnización al tercero de la víctima del daño, la Ley peruana lo hace sobre la

base de entender como objetivo del contrario mantener indemne el patrimonio del asegurado y prohibir que se contrate el seguro de responsabilidad civil como un segundo reembolso, consagrando expresamente además la acción directa de la víctima contra el asegurador y exigiendo la inclusión dentro de ella del asegurado como parte demandada (tema que en el caso colombiano se encuentra en aun en discusión). (Ordóñez Ordóñez, 2014, pág. 33)

Capítulo IV

Del análisis y los resultados

La necesidad de generar un esquema adecuado de sanciones por el incompleto servicio de protección indemnizatoria del SOAT

4.1. Los resultados del análisis de la eficacia indemnizatoria del SOAT

En el Perú se tiene un sistema limitado a las indemnizaciones que deben pagar las aseguradoras, esto hace referencia principalmente al Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes –SOAT–, el cual es un seguro obligatorio para accidentes de tránsito que cubre riesgos de muerte y lesiones físicas que sufran las personas como consecuencia de un accidente de tránsito en el que participen un vehículo. Si revisamos el SOAT vamos a poder comprobar que se ha establecido una suerte de “tablas de baremación de los daños”, que representa el monto establecido que necesariamente va a recibir la víctima del daño, por lo que consideramos que pueden servir como parámetros base realmente objetivos a efectos de establecer la cuantía del daño moral en este extremo. (Linarez Avilez, 2012, pág. 10)

Debe entenderse a la baremación como aquel sistema que se ocupa del reconocimiento del nivel de afectación que se ha producido en el sujeto, así pues “la cuantificación y la indemnización de daños personales debe apoyarse en el empleo de baremos (...) El empleo de baremos aporta numerosas ventajas”. (Hernández Cueto, 2014, pág. 147)

Acorde con un sistema de asunción de responsabilidad adecuado y moderno, la LRCA ha previsto en su artículo 9º que deben constatarse también los efectos

nocivos a “(...) la competencia y el bienestar de los consumidores (...)”. Por lo tanto, para sancionar la conducta no bastará la sola comisión de la misma. Destacamos sin embargo -a diferencia de lo expuestos- que la modalidad de fijación horizontal de precios puros, será sancionable con la sola constatación de la conducta (artículo 11.2 literal a de la LRCA). Esta postura de sanción objetiva fue adoptada por la sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que aplicó la “Regla Per se” y declaró en el caso de fijación de precios del SOAT (2010) que “basta la sola celebración del acuerdo para estar dentro del supuesto de infracción”. (Capcha Coronado, pág. 2)

La estructura obligatoria normativa, consiste en coberturas de daños a bienes de propiedad de terceros, lesiones, muerte y montos mínimos, fue definida por el legislador con el fin de procurar unos recursos, por lo demás, muy bajo para indemnizar a las víctimas y no en función de la protección del patrimonio del asegurado, ni de la realidad del daño que se puede llegar a ocasionar; y como lo ha puesto de presente Juan Manuel Díaz-Granados, la cuantía de valores asegurados son exiguas si se tienen en cuenta los criterios elaborados por la jurisprudencia para la liquidación del daño extrapatrimonial. (Zornosa Prieto, 2011, pág. 28)

Otra de las características esenciales del SOAT es la búsqueda de la cobertura inmediata por parte del centro asistencial a la víctima para lograr su atención eficaz, para lo cual se constituyen diferentes mecanismos como el principio de inoponibilidad de las excepciones consagrado en el artículo 12 del decreto 2544 de 1987: A las víctimas de los accidentes de tránsito y sus causahabientes no les serán oponibles excepciones derivadas de vicios o defectos relativos a la celebración del contrato o al incumplimiento de obligaciones propias del tomador. Con todo, la compañía aseguradora podrá repetir contra el tomador por cualquier suma que haya

pagado como indemnización por concepto del seguro de daños causados a las personas en accidentes de tránsito, cuando este o quien este conduciendo el vehículo en el momento del accidente, con su autorización, haya actuado con dolo, culpa grave o dentro de aquellas circunstancias en que el seguro adolece de vicios o defectos coetáneos a su contratación o al incumplimiento de obligaciones imputables al tomador. (Patiño Escobar , 2013, págs. 17-18)

Para el caso de la evaluación de este tipo de acciones se ha previsto la revisión de las acciones que se han tomado a nivel de INDECOPI respecto a las acciones que se siguen sobre el carácter idóneo de los contratos que se siguen por la acción resarcitoria del SOAT en el Perú; por lo mismo que se plasman los siguientes diagramas.

Resolución Final Nº 0183-2016/CC3

Expediente: 57-2016/CC3

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Nº 3

SEDE CENTRAL

SUMILLA: “Sancionar a RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse acreditado durante el procedimiento que en ciento catorce (114) casos de incapacidad temporal e invalidez permanente requirió requisitos adicionales a los señalados por la norma vigente para atender las indemnizaciones derivadas del SOAT.

Acción inidónea

54. En el presente caso, RIMAC exigió un informe médico y los resultados de los exámenes realizados. Cabe resaltar que la consecuencia de exigir dichos requisitos genera en los beneficiarios un costo adicional no previsto, asimismo, quebranta su expectativa, dado que ellos esperarían que ante un accidente de tránsito, se les otorguen las indemnizaciones correspondientes sin mayor dilación y trabas.

RESOLUCIÓN

“PRIMERO: Sancionar a RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con una multa ascendente a 56.1 UIT, por la infracción al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del consumidor, en la medida que ha quedado acreditado que requirió requisitos adicionales a los señalados por la norma vigente para atender 8114) casos de indemnizaciones por incapacidad temporal e invalidez permanente derivadas del SOAT. (...)”

Fuente: INDECOPI – Comisión de Protección al Consumidor Nº 3 – Sede Central. Elaboración propia del autor.

Resolución 2434-2021/3PC-INDECOPI

Exp. 0307-2020-CPC-INDECOPI-LAL

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD

SUMILLA: Se declara la nulidad parcial de la resolución de imputación de cargos y de resolución venida en grado por vulneración del principio de congruencia procesal.

Acción inidónea

24. el supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a este la carga procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad.

RESOLUCIÓN

“QUINTO: Sancionar a LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. con una multa ascendente a 2 UIT, por la infracción al artículo 19 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del consumidor, por no haber cumplido con otorgar a la señora xxx la cobertura del SOAT del vehículo por invalidez permanente parcial de su menor hija, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 14 de febrero del 2018 (...)”

4.2. Los resultados del análisis de sanciones a las empresas aseguradoras

Luego de revisar la realidad de las sanciones que ocupan a los casos denunciados respecto al incompleto servicio indemnizatorio del SOAT a cargo de las empresas aseguradoras, se ha verificado que el resultado sancionador a este tipo de empresas es administrado por el INDECOPI, que sin duda alguna se orienta a la protección de los intereses que corresponden a los usuarios de este servicio. Tal naturaleza es loable en cuanto a la atención de las necesidades desatendidas o alteradas en su estructura; pero no resulta lo suficientemente satisfactoria puesto que el contenido proteccionista para este tipo de casos implica una sanción que realmente cubra las expectativas no sólo de resarcimiento del daño producido de manera inmediata, sino también se requiere de un cambio permanente en el esquema a fin de que no se propicien nuevamente este tipo de acciones.

Lograr esta meta requiere de la imposición de parámetros específicos sobre los ya existentes, puesto que como se ha podido revisar la potestad sancionadora respecto a este tipo de incurrencias administrativas le corresponde a la Superintendencia de Banca y Seguros, toda vez que sobre este último rubro tendrá que ejercer el control o fiscalización suficiente a fin de propiciar el conocimiento adecuado y la posterior sanción en razón de las irregularidades que se presentan como la planteada en el problema de esta investigación.

De acuerdo a la revisión de la estructura sancionadora que se registra en el Perú, se ha podido apreciar la participación activa de la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros, la misma que durante el año 2021 se ha pronunciado con la modificación del reglamento de sanciones para el sector financiero. Es así que mediante la Resolución 277 del día 28 de enero del 2021, modifica en algunos aspectos el Reglamento de sanciones establecido en dicha institución.

De la revisión de dicha resolución se puede encontrar entre los principales aportes el hecho de que se establece un control general con la aplicación de sanciones de tipo leves y graves, así pues resulta importante tener en consideración lo señalado respecto a las prácticas abusivas que precisamente es lo que se percibe respecto a este tema, donde se indica que este tipo de acciones se encuentran prohibidas, dejando abierta la posibilidad de que la propia SBS, pueda ampliar las especificaciones de este tipo de conductas, en razón de su función fiscalizadora.

Atendiendo a la supervisión que se entiende está a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros, las acciones de sanción que se produzcan deben ser asumidas por esta administración, para lo cual se precisa de la incorporación de parámetros específicos que generen una sanción adecuada y el efecto de control sobre la manera en que se ejecutan las indemnizaciones que devienen de los siniestros.

4.3. La vulneración de los derechos fundamentales como justificación de la intervención sancionadora de la SBS

Conforme se ha venido indicando, en razón de los resultados obtenidos del análisis de la realidad sancionadora que se ocupa de los actos administrativos irregulares que propician un efecto de incompleta protección indemnizatoria del SOAT, se ha podido verificar la concurrente acción negativa por parte de las empresas aseguradoras aplicándose por ello una sanción en dos oportunidades, lo cual permitió verificar que el problema de fondo no se ha solucionado, esto es alcanzar un nivel de correcta administración del servicio indemnizatorio.

Tal es así que se observa también la existencia de normas específicas para que la SBS intervenga en el plano de sanciones, lo cual no ha surtido eficacia respecto al tema tratado, por lo mismo que se precisa de la sugerencia de aplicación

directa de este tipo de potestades, pero bajo el parámetro de adecuada organización estructural de la intervención administrativa para el ejercicio fiscalizador que permitirá el conocimiento de la responsabilidad y la posterior sanción. Para este caso según lo advertido como falencia en la intervención que ha tenido INDECOPI, sería necesaria la aplicación de una regla existente en el esquema normativo del procedimiento administrativo sancionador, como lo es el principio de culpabilidad a fin de reconocer no sólo la incorrecta función administrativa de parte de las aseguradoras, sino también para en estos casos específicos ante la concurrente acción lesiva se pueda aplicar una sanción lo suficientemente grave a fin de evitar los perjuicios como en este caso la incompleta protección indemnizatoria del SOAT.

Según lo planteado, para alcanzar un nivel sancionatorio óptimo se requerirá de una justificación jurídica válida que permita restringir derechos que le corresponden a las personas jurídicas como son los entes que fiscaliza la SBS; en ese sentido, se habrá de utilizar como eje de la justificación a los derechos fundamentales que les asisten a los usuarios a quienes les corresponde la atención inmediata del servicio del SOAT, en cuanto a la ejecución indemnizatoria. En efecto la situación negativa que se describe en esta investigación tiene como base la alteración de ciertos derechos que alcanzan el nivel de fundamentales, tal es el caso el conocido como derecho al debido procedimiento administrativo, que desliga de la correcta administración de justicia y tiene un enlace directo con el derecho a la igualdad ante la ley que le corresponde a todos los ciudadanos.

Esto último tiene un efecto directo sobre la situación personal de los usuarios vulnerados, lo que implica concretas afecciones sobre el trato que les corresponde como seres humanos, esto es un criterio discriminador, toda vez que

como se ha visto en los casos descritos, altera aspectos internos del ser como lo señalado respecto a la expectativa sobre la protección indemnizatoria que al llegar fuera del tiempo establecido en razón a demoras que no le corresponde, proyecta un problema incluso de afectación patrimonial. Todos estos supuestos jurídicos como se ha dicho tienen no solo la condición de fundamental en tanto a sus contenidos, sino que existe un fuerte enlace entre todos ellos; por lo mismo que dicha alteración se constituye como una razón justificante que permita tomar acción sobre la realidad existente aplicando el rigor de la justicia, que para el caso del derecho administrativo corresponde al principio de culpabilidad que se ha incorporado en su estructura normativa con el fin de poder atender circunstancias especiales como las descritas en el problema de esta investigación.

4.4. Los resultados de la validación de los expertos

Tabla 1: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1”.

1. Los eventos considerados como accidentes de tránsito generan daños respecto a las personas involucradas como víctimas, ante lo cual corresponde otorgar un beneficio económico o de atención, que satisfaga la necesidad indemnizatoria por la afectación.

Alternativa	Respuestas
a. De acuerdo	42
b. En desacuerdo	07
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 1: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 1”.

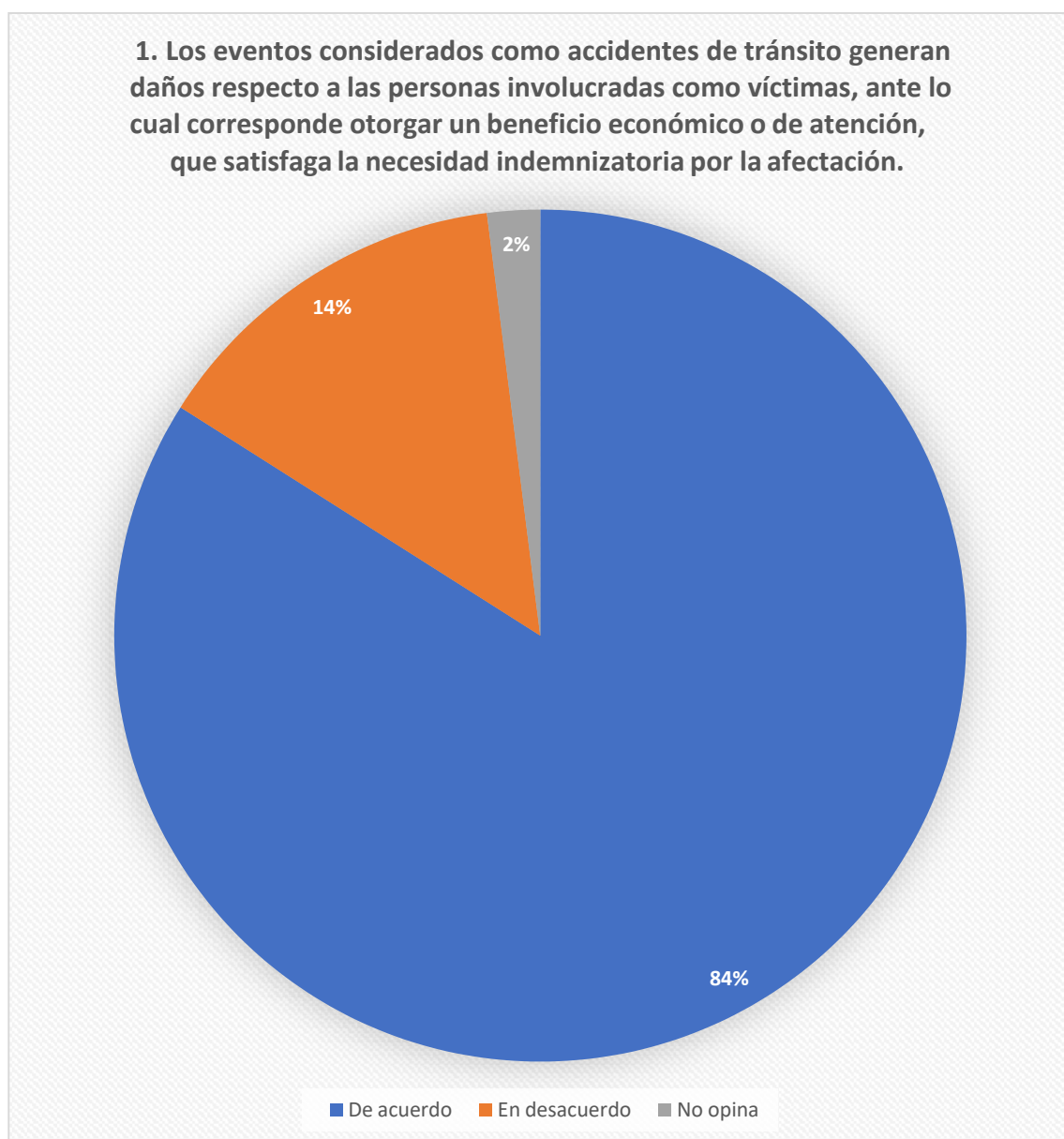


Tabla 2: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”.

2. La forma en que se ejecuta la intervención del SOAT por parte de las aseguradoras, resulta insuficiente desde la perspectiva temporal puesto que no atiende con inmediatez el incidente, lo cual tiene por característica un problema de excesivo trámite en cuanto a los requisitos entendidos como barreras burocráticas para su cobro.

Alternativa	Respuestas
a. De acuerdo	38
b. En desacuerdo	10
c. No opina	02
Total	50

Ilustración 2: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 2”.

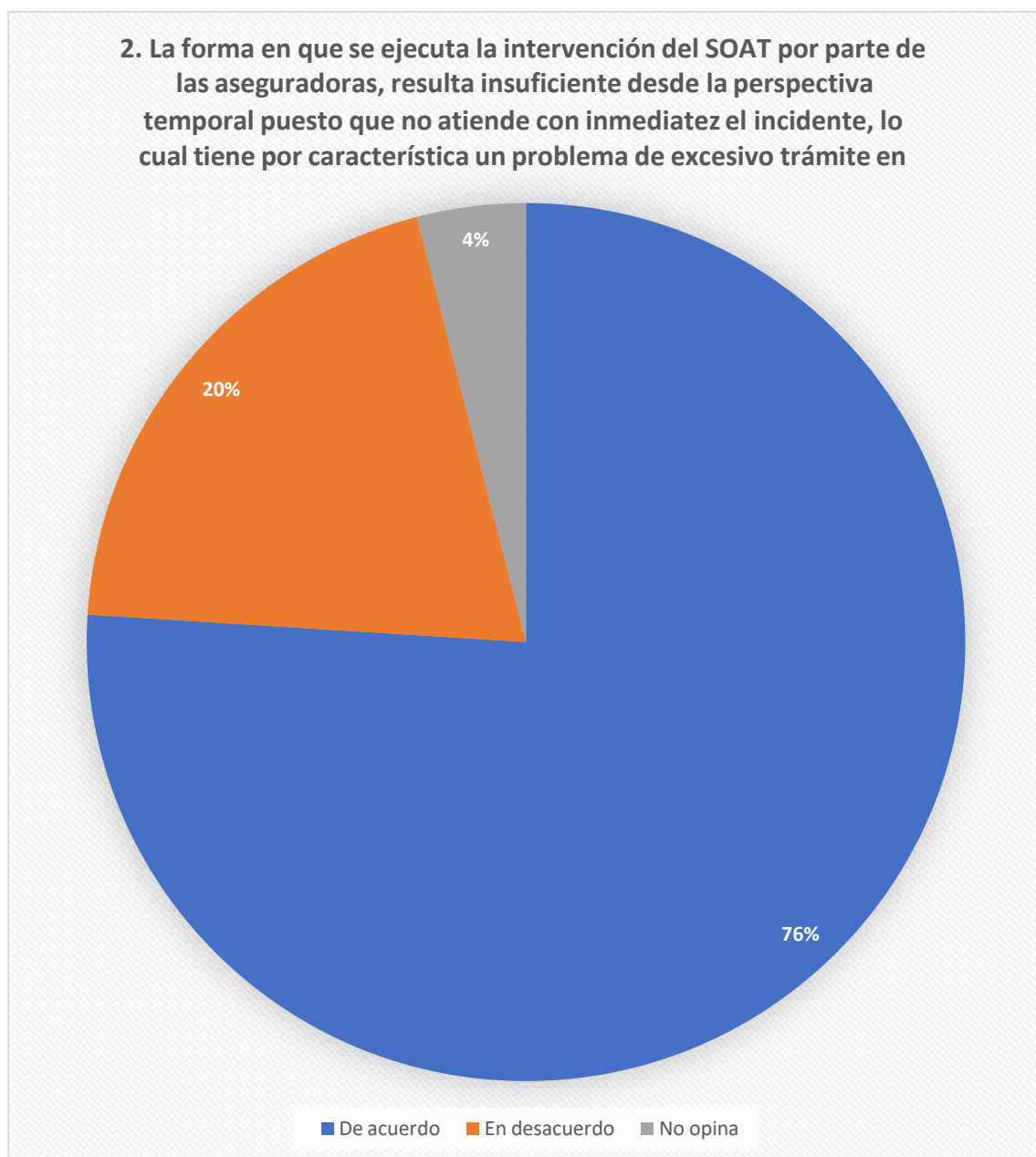


Tabla 3: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 3”.

3. La solución al problema de la incompleta protección indemnizatoria, estaría enfocada en razón de la intervención del Estado para que mediante su fiscalización se pueda crear una característica de inmediatez para el cobro de dicho beneficio, favoreciendo a la víctima del accidente de tránsito y estableciendo un límite de equilibrio con los intereses de la aseguradora.

Alternativa	Respuestas
a. De acuerdo	40
b. En desacuerdo	09
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 3: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 3”.

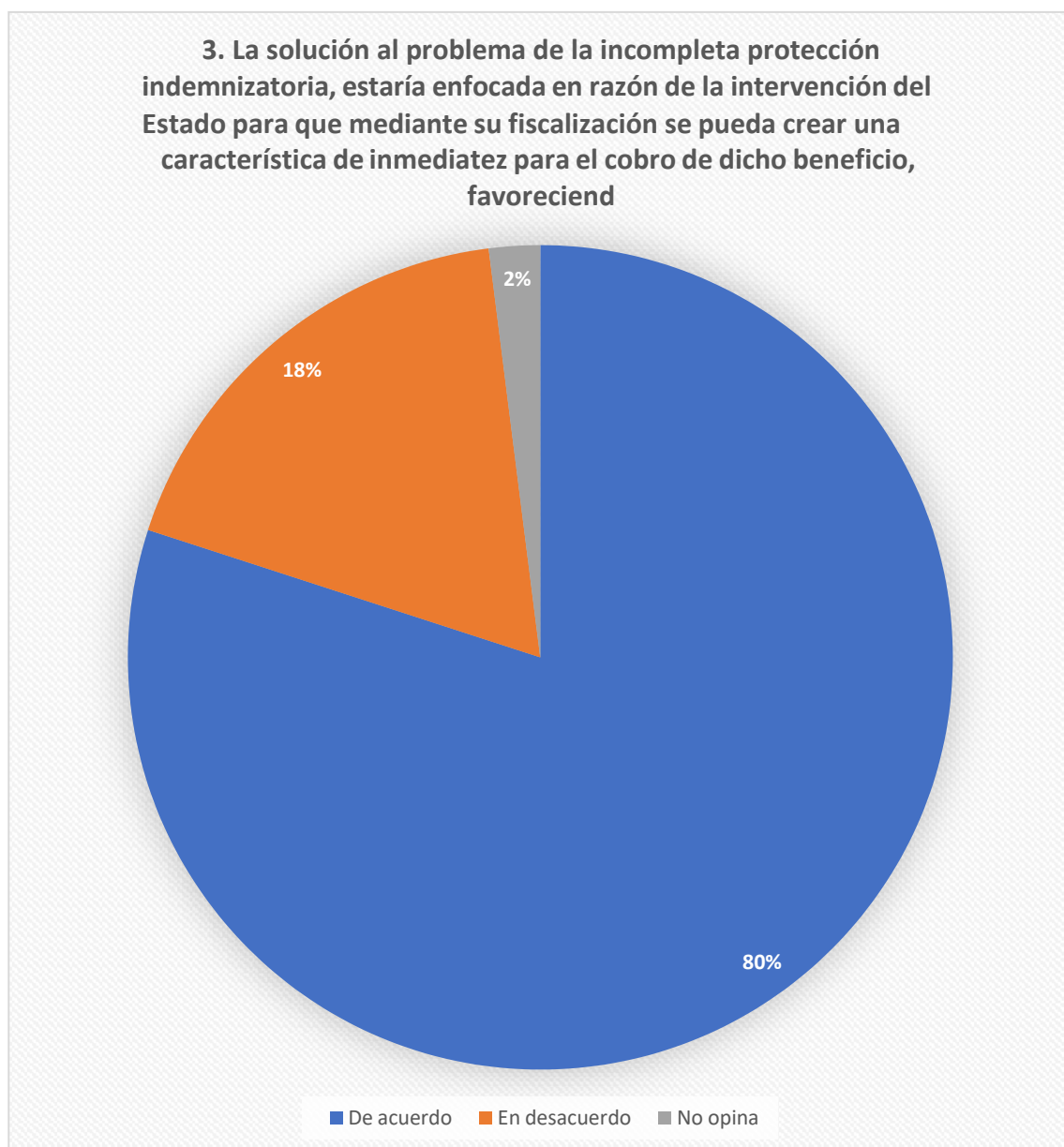


Tabla 4: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4”.

4. A nivel administrativo la responsabilidad se mide en función de la falta objetiva sobre la regla, lo cual tiene como consecuencia una sanción de tipo administrativa, que se aplica en función al esquema de la Ley de Procedimiento Administrativo General.

Alternativa	Respuestas
a. De acuerdo	39
b. En desacuerdo	08
c. No opina	03
Total	50

Ilustración 4: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 4”.

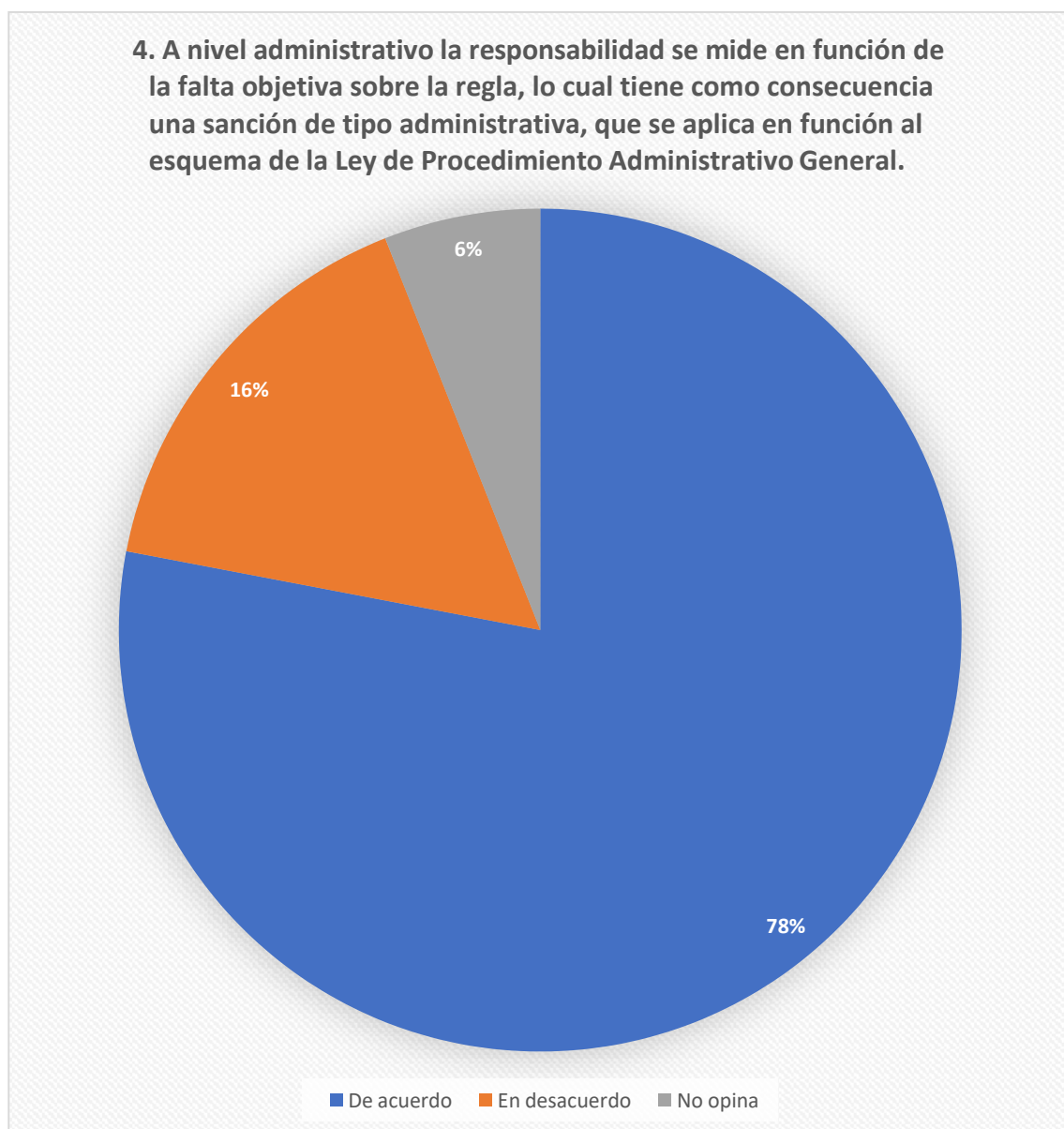


Tabla 5: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5”.

5. La aplicación de las sanciones a nivel administrativo se desarrollan en base al derecho administrativo sancionador que recoge el ius puniendi del Estado, lo cual se orienta en función a la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero no se adecúa al sentido del principio de culpabilidad que recoge.

Alternativa	Respuestas
a. De acuerdo	38
b. En desacuerdo	09
c. No opina	03
Total	50

Ilustración 5: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 5”.

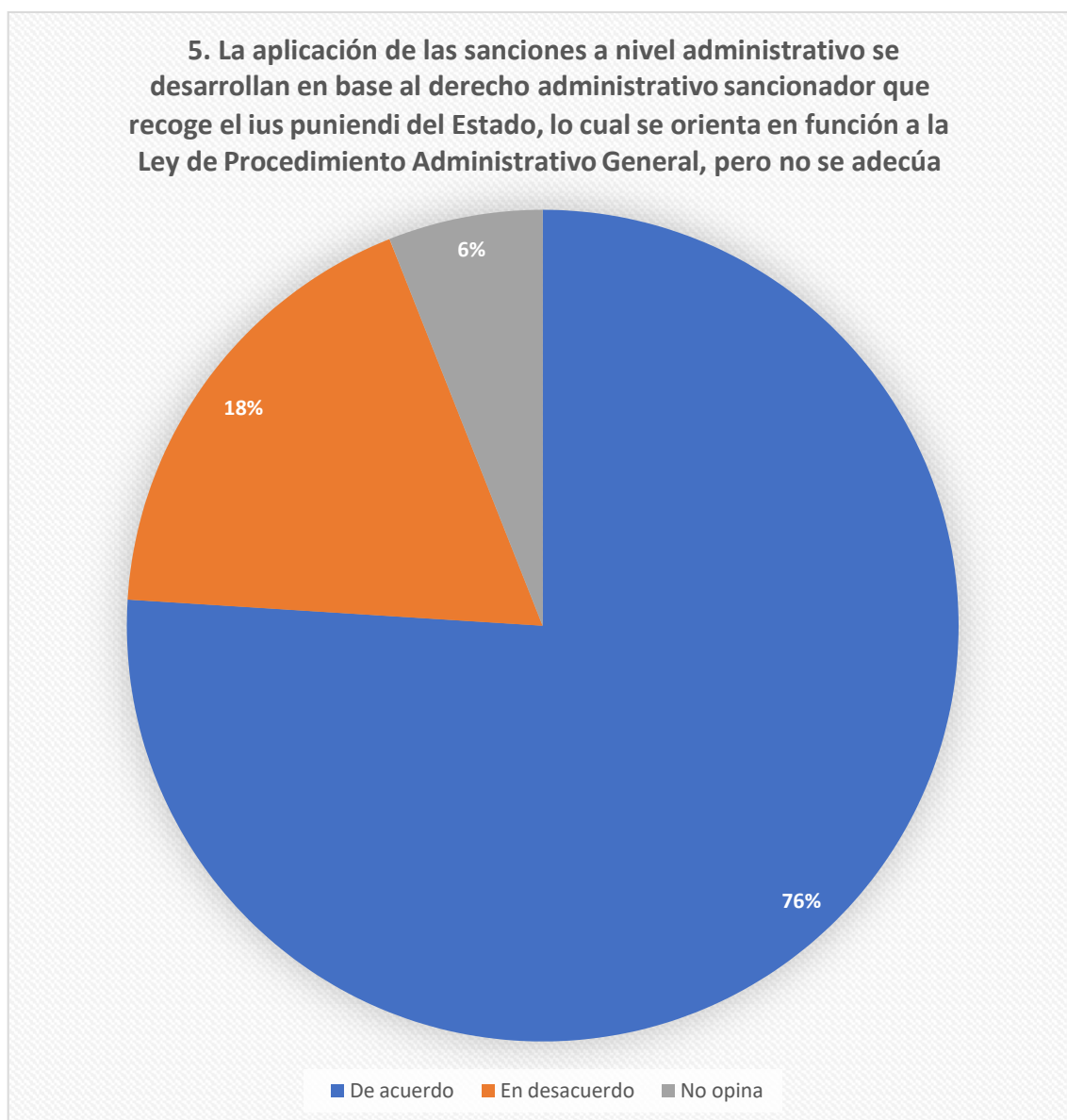
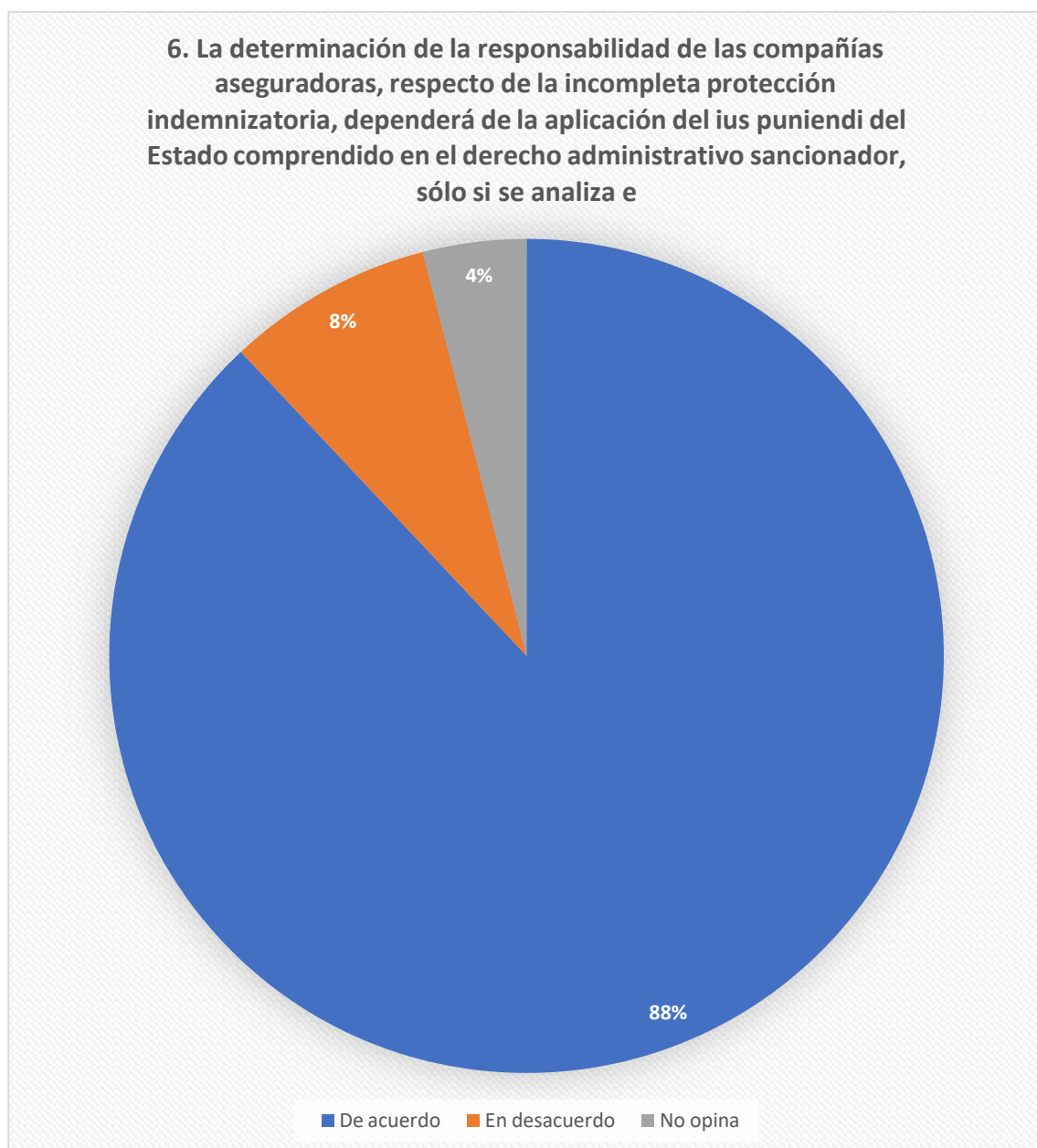


Tabla 6: “Tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6”.

6. La determinación de la responsabilidad de las compañías aseguradoras, respecto de la incompleta protección indemnizatoria, dependerá de la aplicación del ius puniendi del Estado comprendido en el derecho administrativo sancionador, sólo si se analiza en función al principio de culpabilidad.

Alternativa	Respuestas
a. De acuerdo	44
b. En desacuerdo	04
c. No opina	02
Total	50

Ilustración 6: “Gráfica porcentual de la tabulación de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los operadores administrativos de la ciudad de Chiclayo, respecto a la afirmación 6”.



Capítulo V

De la contrastación de la hipótesis

Según la secuencia de la investigación, le corresponde a esta fase la estructuración secuencial de criterios o razonamientos desde el punto de vista jurídico con el fin de forjar los argumentos que permitan establecer una determinación final, la misma que como resultado será contrastada con la hipótesis inicial de la investigación a fin de verificar el nivel de corroboración y asumir el carácter científico del resultado de la tesis.

Esta secuencia se da inicio con la discusión de los resultados orientada en función a las metas de la investigación, para luego con dichos resultados a través de tomas de postura, alcanzar la validación de las variables que permiten la crear la determinación final del trabajo académico.

5.1. La discusión de los resultados

Conforme se indica en la descripción inicial del capítulo, esta sección se ocupará de crear un discurso crítico respecto a los contenidos plasmados en la investigación, marcados por cada uno de los objetivos específicos, luego de lo cual mediante la síntesis se logró establecer las tomas de postura que definen la percepción del investigador, lo cual se muestra a continuación.

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la teoría de la responsabilidad administrativa enfocada al servicio de las compañías de seguros”

Siendo la responsabilidad administrativa el primer punto de interés de esta investigación, conviene direccionar la discusión sobre el objetivo que la inspira, así pues dicha condición de responsabilidad se ubica como una variante de lo que se conoce de manera general como la responsabilidad civil, por lo que se ha de tener en cuenta ciertos aspectos que ubican dicha relación y permiten reconocer la

aplicación sobre el servicio que ofrecen las compañías de seguros para posteriormente hacer una indicación puntual respecto a las que se ocupan del SOAT.

Cabe indicar que la responsabilidad como concepto puede ser aplicado en las distintas áreas del derecho, por ello desde el ámbito civil se hace referencia al responsable que adquiere la obligación con el fin de cumplir la satisfacción del daño causado, ello en tanto la acción se haya desarrollado fuera del marco de permisibilidad, por lo cual el comportamiento alejado de ello implica una consecuencia que se refiere a la responsabilidad, es decir las personas, por sus actos, se sujetan a una obligación respecto de la cual es responsable de cumplir.

A ello se suma la idea de una obligación contraída por una persona que, por su culpa, ha causado en otro algún daño, buscando de esta forma expiar sus actos y satisfacer de algún modo a la víctima de estos daños; desde luego todo ello deviene de un conflicto entre dos o más personas, en el cual, una de ellas, es responsable de reparar el daño ocasionado a la otra que vendría a ser la víctima; es así como surge el resarcimiento de los daños causados haciendo uso de los instrumentos legales.

Luego resulta prudente hacer un cuestionamiento si es que la figura de la responsabilidad es una simple ecuación de consecuencias a razón de acciones u omisiones que salen del marco de la licitud, lo cual conlleva a la obligación de satisfacer el daño que se causa; siendo así entonces, en lo que se refiere al contrato del seguro SOAT, implica el compromiso de la cobertura de los gastos además de la indemnización, en ese sentido el incumplimiento o entorpecimiento de este fin acarrearía una nueva obligación, pero requiere de que sea controlada por parte del Estado a fin de garantizar su ejecución.

Se entiende que esta construcción jurídica tiene por finalidad no sólo asegurar el su cumplimiento, sino también servir de acción preventiva del abuso o arbitrariedad de quien maneja el poder de acción y decisión en este tipo de ejecuciones particulares, esto implica pues el discernimiento para decidir que acciones ha de realizar y que se entiende éstas deban estar ajustadas a las reglas que incorpora el ordenamiento jurídico; se habla entonces de la razón que le corresponde asumir a cada sujeto de lo que parte la identificación del compromiso, el cual es el sentido de las obligaciones.

Resulta importante reconocer una característica que esta relacionada con la capacidad, pues tiene que ver también con el hecho de que el sujeto en tanto capaz de discernimiento, podrá conocer cuando alguna acción cae en el ámbito de lo restringido convirtiendo a la acción en culpable, siendo esto en lo que se basa la comprensión de dicho principio ahora recogido en el ordenamiento administrativo y que se estudiará en el siguiente capítulo, para reconocer la posibilidad de que sea aplicada a la comprensión de la responsabilidad de las personas jurídicas como son las aseguradoras.

La responsabilidad civil consiste, asumir la obligación de resarcir un daño ocasionado en una persona derivado de los actos u omisiones en los que haya incurrido aquel que tenía el deber cumplir un acuerdo; pues a través de esta institución se buscará justificar el actuar, asumiendo las consecuencias del daño ocasionado; si bien no se repara el daño ocasionado en su totalidad, pero de alguna forma buscará menguar los conflictos que se inicien a raíz de su actuar, ya sea por la inobservancia de las normas jurídicas existentes.

La idea principal es asegurar el correcto funcionamiento del derecho, pues el ordenamiento jurídico regula la responsabilidad civil como una disciplina que

garantiza el cumplimiento de las consecuencias derivada de actos ilícitos. Lo que se busca con esta institución de la responsabilidad civil es el resarcimiento por el daño causado, así como determinar que aquella persona que fue la causante del hecho sea más cuidadoso con sus actuaciones en un futuro para así evitar conflictos en la sociedad.

Toma de postura:

Las Compañías de Seguros al ser persona jurídica tienen condición de sujeto de derecho, y como tal ante algún incumplimiento a la normas establecidas que origine una indebida o incompleta protección indemnizatoria conlleva a determinar el grado de responsabilidad y posterior sanción en razón de la responsabilidad administrativa que le corresponde.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar el principio de culpabilidad en la Ley de Procedimiento Administrativo General y su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador”

¿Qué se entiende por el principio de culpabilidad?

Teniendo en cuenta que el principio de culpabilidad, por su condición originaria ha de asumirse como una regla de optimización, esto es que tiene por finalidad de acudir a la resolución de conflictos que se producen en la realidad jurídica, para orientar la correcta aplicación del derecho en tales casos. Bajo el concepto de regla general y orientadora que se le otorga a los principios, en lo que respecta a la culpabilidad, asiste a ello la potestad de indicar el grado de responsabilidad que le atañe a determinadas personas que en razón de sus actuaciones salen del esquema organizacional del Estado.

Por lo indicado, la aplicación del principio de culpabilidad obedece a la presencia del quebrantamiento de la estructura normativa, que se refleja en una consecuencia dañosa, esto es que ocasiona un perjuicio que puede ser tanto sobre otras personas o sobre el Estado mismo.

¿cuál es la función que cumple el principio de culpabilidad en el procedimiento administrativo?

En lo que corresponde al principio de culpabilidad se debe señalar que su participación en el esquema del procedimiento administrativo general es de carácter normativo, precisamente porque se ubica dentro de la estructura principista que orienta todo el procedimiento. Según lo indicado anteriormente, la función de este principio sería la de controlar la manera en que se ejecuta la evaluación para el reconocimiento de la responsabilidad en tanto exista el indicio de un daño; entonces tal función implica de su asistencia ante ciertos casos de difícil resolución, esto es que las reglas destinadas a ello no sean suficientes.

Esta presencia taxativa, lo convierte en una herramienta de apoyo al reconocimiento de la responsabilidad, luego debe revisarse la manera en que se determinan las responsabilidades en el ámbito administrativo, la misma que esta a cargo de un funcionario público, el cual haciendo uso de sus facultades observa la estructura de las reglas y en función a ellas corrobora el incumplimiento de las mismas; esto implica una aplicación directa de la ley sobre las acciones de los administrados, por lo mismo que se entiende un carácter objetivo en la determinación de las sanciones que no salen del ámbito administrativo.

De acuerdo a lo indicado, este reconocimiento tendrá una valoración específica por parte del funcionario público, que de manera previa revisará el nivel de lesión o perjuicio que el acto administrativo hubiera ocasionado respecto de la administración pública, lo que conlleva al reconocimiento de la responsabilidad y la ejecución de las sanciones que correspondan.

¿qué efectos tiene el principio de culpabilidad respecto a su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador?

Según la estructura normativa de la Ley General de Procedimientos Administrativos, la presencia del principio de culpabilidad implica un elemento que rige la solución de conflictos normativos en la aplicación del derecho administrativo. Siendo así, la construcción del esquema de control administrativo incorpora una fase sustantiva que es la propia Ley antes indicada, teniendo una fase adjetiva que orienta el desarrollo de un procedimiento especial que luego de la evaluación correspondiente desencadena en una sanción.

Este último procedimiento sin duda alguna requiere de la orientación de ciertos principios que tendrán relación directa con la parte sustantiva que le sirve de base jurídica; siendo que, el principio de culpabilidad se encuentra sustantivamente contemplado, debe tener la función de control requerida a fin de lograr una adecuada evaluación de la actividad administrativa pasible de sanción.

Tal cual se indica, esta ausencia reguladora trae el consecuente efecto negativo respecto a la evaluación de la culpabilidad en las acciones

administrativas, lo cual implicaría el desencadenamiento de la intervención estatal mediante sanciones adecuadas y bajo una evaluación completa.

Toma de postura:

Resulta de vital importancia la aplicación del Principio de Culpabilidad en los procesos administrativos sancionadores, ello porque, es a partir de su aplicación que se determinará la responsabilidad y con ello el grado de reprochabilidad teniendo en cuenta la lesión provocada, logrando con ello el fin del derecho administrativo sancionador.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Observar el desempeño del cumplimiento de las aseguradoras respecto a la protección indemnizatoria del SOAT”

En lo que corresponde a la observación de las actividades realizadas por las compañías aseguradoras que asumen el compromiso de ocuparse de la protección que se ha de generar ante la eventualidad de los accidentes de tránsito, se ha podido verificar que la sistematización se orienta hacia las indemnizaciones las mismas que según lo indicado en el desarrollo de la tesis, se apoya en la determinación de los baremos que permitan consolidar la valoración del daño que servirá de base para la ejecución del acto indemnizatorio.

En ese sentido resulta de vital importancia el carácter valorativo, pero además se requiere de la adaptación de un procedimiento adecuado que garantice la eficacia en las atenciones y desde luego la correspondiente indemnización, es importante por ello tener en cuenta que la secuencia del tratamiento para esta última requiere de la participación de ciertos elementos probatorios como requisitos para alcanzar el derecho a la indemnización, los cuales son plasmados correctamente en la regla.

Sobre ello es que se aprecia un problema de incumplimiento de parte de las aseguradoras que asumen el compromiso del SOAT, así pues Saliendo del ámbito de la regla la Ley 29571 que en su artículo 19 contempla la prohibición de exigir requisitos adicionales a los señalados por la norma que rige para la atención indemnizatoria que se deriva de accidentes de tránsito, tal cual se ha podido apreciar el ejemplo casuístico planteado en el que la empresa Rimac Seguros y Reaseguros, es sancionada por la presencia de esta acción en 114 casos de incapacidad temporal e invalidez.

Además de ello, parte de la observación respecto a la realidad que se presenta en el ámbito de la protección del SOAT por parte de las empresas aseguradoras, se ha recogido la opinión de los expertos mediante la cual se pudo apreciar que respecto a la consideración de los eventuales accidentes de tránsito que generan daños a las personas como víctimas, corresponde otorgar un beneficio económico para satisfacer la necesidad indemnizatoria producida por los efectos del accidente, ante lo cual se recopiló un 84% de opiniones a favor de dicha postura.

Así también desde el punto de vista crítico, sobre la manera en que se acciona a través del SOAT en lo que corresponde a la intervención de las aseguradoras, considerando esta acción como insuficiente debido a la falta de inmediatez en la intervención respecto al incidente dado el exceso de la tramitación lo que incluye ciertos requisitos que se conciben como barreras burocráticas antes de la compensación, ante lo cual se obtuvo un 76% de aprobación de los expertos encuestados.

En ese sentido planteada la determinación y la crítica que constituye el problema, se hubo de plantear una sugerencia que se enfocó desde la participación interventora del Estado a fin de que a través de labores que permitan fiscalizar, se

cree una característica de cobro inmediato del beneficio o indemnización, así el favorecimiento sería más adecuado para satisfacer la necesidad generada por el accidente de tránsito, propiciando el equilibrio de intereses, ante lo cual se alcanzó un 80% de aceptación de parte de los operadores jurídicos.

Por otra parte el reconocimiento conceptual de la responsabilidad administrativa se planteó para ser medido en razón de la faltas objetivas generadas sobre la regla, en virtud de ello se alcanza una consecuencia sancionadora a nivel administrativo lo cual es aplicado de acuerdo al esquema de la Ley de Procedimiento Administrativo General, postura determinante que ha sido aceptada por el 78% de la población encuestada.

En consecuencia a ello se planteó la crítica respecto a la aplicación sancionadora en el ámbito administrativo que se ocupa de este tipo de sanciones, sobre todo para incorporar el sentido del ius puniendi del Estado que se orienta por la Ley de Procedimiento Administrativo General, sin embargo ello no esta adecuado al principio de culpabilidad que se ha recogido en dicha regla, esta determinación ha obtenido un nivel de aceptación de 76% de los expertos en la materia.

Finalmente se desarrollo una sugerencia respeto a que la forma correcta para determinar la responsabilidad de las compañías aseguradoras que se ocupan de la atención del SOAT, en tanto se reconozca la incompleta protección indemnizatoria, ha de estar sujeta a la aplicación del ius puniendi del Estado que se orienta en el derecho administrativo sancionador incorporando en la valoración del acto a la función determinante del principio de culpabilidad, lo cual ha obtenido una aceptación del 88% de la población encuestada.

Conforme se puede apreciar de los resultados referidos a la opinión de los expertos, se reconoce un alto nivel de validación, lo que permite reconocer en primer lugar la existencia del problema planteado en la realidad y segundo la viabilidad de la propuesta planteada, lo cual además esta reforzado por la verificación de las acciones incorrectas generadas en el desarrollo del trámite previo exigido para la compensación, en el que se exigen requisitos que no están contemplados en la regla, retardando el pago de la indemnización.

Toma de postura:

De acuerdo a lo que se ha podido observar, las acciones de las aseguradoras en su labor de protección indemnizatoria relacionada con el SOAT, resulta de un carácter deficiente, toda vez que se aprecia no solo la ineficacia en la atención efectiva, sino que además se reconocen acciones burocráticas incorporadas fuera del margen de la regla, esto es exigiendo requisitos que no están contemplados en el ámbito legal para la evaluación, reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente, lo cual produce demoras innecesarias propiciando ineficacia en la atención proteccionista.

5.1.4. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de generar un esquema adecuado de sanciones por el incompleto servicio de protección indemnizatoria del SOAT basado en el principio de culpabilidad”

De otro lado se puede apreciar que en la actualidad la manera en que se exigen los requisitos para el pago de la indemnización de parte del SOAT en función al siniestro ocurrido no es uniforme, por lo mismo que tal irregularidad conlleva la vulneración del derecho de los administrados, puesto que la demora en la atención de este beneficio, resulta ser un indicador de incompleta protección indemnizatoria.

Esta circunstancia se denota de la concurrente inconducta de las aseguradoras que de manera continua ejecutan acciones lesivas a los derechos de

aquellos asegurados bajo los parámetros del SOAT, lo cual se demuestra de la observación antes realizada en función a las resoluciones de sanción que se verifican a nivel de INDECOPI, puesto que la misma acción incorrecta se verifica entre los años 2016 y 2021. Ello demuestra la necesidad de que se generen reglas específicas de sanción, basadas en el criterio de análisis respecto al principio de culpabilidad.

La aplicación de tal principio que de hecho rige en el procedimiento administrativo como regla de análisis de la infracción, permitirá la aplicación de sanciones más eficaces para las aseguradoras que incumplen con las reglas establecidas para la ejecución de las indemnizaciones del SOAT. Esto implica que ante la verificación de acciones sucesivas sobre el mismo aspecto como es la exigencia de requisitos innecesarios y fuera de los establecidos por Ley, permitirá a la supervisión el reconocimiento de la intención dañosa para beneficiar a la propia empresa de seguros.

Esta acción se contempla como un indicador de intención negativa, esto sería lo que impulsa al criterio de culpabilidad, que para el caso de las aseguradoras al ser personas jurídicas, implica una sanción basada en el principio de culpabilidad que debe superar la condición de multa, para trasladarse a una sanción tan grave como las penas accesorias que existen en el Derecho Penal para este tipo de personas que bajo su condición de ente ideal, pueden ser sancionadas con la suspensión temporal de labores o el cierre definitivo.

TOMA DE POSTURA:

Según lo que se ha podido analizar de la realidad, resulta de necesidad social y jurídica el hecho de sugerir un cambio de criterio en el análisis de la realidad indemnizatoria del SOAT, que se ha verificado como incompleta en cuanto a los

niveles de satisfacción debido a la exigencia de requisitos innecesarios y la demora en su ejecución, lo cual genera lesión en el administrado, actos que son repetitivos en el tiempo por parte de las aseguradoras y que pese a las sanciones de multa aplicadas no han cesado. Se precisa por ello la acción del Estado para incorporar cambios normativos que permitan sancionar en base al principio de culpabilidad con la suspensión de labores o el cierre definitivo de dichas empresas, generando con ello mayor coerción.

5.2. La validación de las variables

Según la indicación que corresponde a la secuencia de la contrastación, en esta parte se trabajará con las tomas de postura adoptadas en razón de la discusión de los objetivos específicos, los cuales se ordenaron de acuerdo a su relación con cada una de las variables, luego mediante la síntesis de dichos planteamientos se logra establecer una definición conceptual que representa la validación de la variable.

5.2.1. Sobre la variable independiente: La incompleta protección indemnizatoria del SOAT

Teniendo en cuenta que esta variable representa el sentido del problema en tanto se constituye en el origen del problema, habrá de señalarse que las acciones de las aseguradoras en su labor de protección indemnizatoria relacionada con el SOAT, resulta de un carácter deficiente, toda vez que se aprecia no solo la ineficacia en la atención efectiva, sino que además se reconocen acciones burocráticas incorporadas fuera del margen de la regla, esto es exigiendo requisitos que no están contemplados en el ámbito legal para la evaluación, reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente, lo cual produce demoras innecesarias propiciando ineficacia en la atención proteccionista.

Es por ello importante considerar como necesidad social y jurídica el hecho de sugerir un cambio de criterio en el análisis de la realidad indemnizatoria del SOAT, que se ha verificado como incompleta en cuanto a los niveles de satisfacción debido a la exigencia de requisitos innecesarios y la demora en su ejecución, lo cual genera lesión en el administrado, actos que son repetitivos en el tiempo por parte de las aseguradoras y que pese a las sanciones de multa aplicadas no han cesado. Se precisa por ello la acción del Estado para incorporar cambios normativos que

permitan sancionar en base al principio de culpabilidad con la suspensión de labores o el cierre definitivo de dichas empresas, generando con ello mayor coerción.

En función a todo lo señalado es posible llegar a la validación de la variable mediante la siguiente afirmación: **Se verifica la incompleta protección indemnizatoria del SOAT, debido a un procedimiento administrativo con vicios que generan demora innecesaria.**

5.2.2. Sobre la variable dependiente: La responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad

Asumiendo la condición de esta variable dependiente como la marcación del efecto que surte la anterior variable, se debe indicar que estas personas jurídicas tienen condición de sujeto de derecho, y como tal ante algún incumplimiento a la normas establecidas que origine una indebida o incompleta protección indemnizatoria conlleva a determinar el grado de responsabilidad y posterior sanción en razón de la responsabilidad administrativa que le corresponde.

Como se puede apreciar es imperativo el hecho de que se instaure la aplicación de un mecanismo procesal en el ámbito administrativo, que se encuentra debidamente regulado, esto es el Principio de Culpabilidad en los procesos administrativos sancionadores, ello porque, es a partir de su aplicación que se determinará la responsabilidad y con ello el grado de reprochabilidad teniendo en cuenta la lesión provocada, logrando con ello el fin del derecho administrativo sancionador.

En función a ello es que se puede señalar como validación de la variable dependiente que: **Es posible atribuir responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad con la intención de evitar la reincidencia de vulneraciones indemnizatorias.**

5.3. Determinación final de la investigación

De acuerdo a la estructura de la investigación la cual se ha construido en los cimientos de las variables, éstas por su unión permitieron construir una meta general la cual se consideró como objetivo general, el mismo que señala:

Determinar si el razonamiento de la incompleta protección indemnizatoria del SOAT sirve como argumento jurídico para determinar la responsabilidad jurídica de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad.

Luego en razón de la unión de las validaciones de cada una de las variables se ha podido establecer una determinación final de la investigación, la cual coincide con los resultados obtenidos mediante el análisis realizado en la misma y se construye de la siguiente manera:

Se verifica la incompleta protección indemnizatoria del SOAT, debido a un procedimiento administrativo con vicios que generan demora innecesaria; por lo tanto, resulta posible atribuir responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad con la intención de evitar la reincidencia de vulneraciones indemnizatorias.

Conclusiones

Primera: Las Compañías de Seguros al ser persona jurídica tienen condición de sujeto de derecho, y como tal ante algún incumplimiento a las normas establecidas que origine una indebida o incompleta protección indemnizatoria conlleva a determinar el grado de responsabilidad y posterior sanción en razón de la responsabilidad administrativa que le corresponde.

Segunda: Resulta de vital importancia la aplicación del Principio de Culpabilidad en los procesos administrativos sancionadores, ello porque, es a partir de su aplicación que se determinará la responsabilidad y con ello el grado de reprochabilidad teniendo en cuenta la lesión provocada, logrando con ello el fin del derecho administrativo sancionador.

Tercera: De acuerdo a lo que se ha podido observar, las acciones de las aseguradoras en su labor de protección indemnizatoria relacionada con el SOAT, resulta de un carácter deficiente, toda vez que se aprecia no solo la ineficacia en la atención efectiva, sino que además se reconocen acciones burocráticas incorporadas fuera del margen de la regla, esto es exigiendo requisitos que no están contemplados en el ámbito legal para la evaluación, reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente, lo cual produce demoras innecesarias propiciando ineficacia en la atención proteccionista.

Cuarta:

Según lo que se ha podido analizar de la realidad, resulta de necesidad social y jurídica el hecho de sugerir un cambio de criterio en el análisis de la realidad indemnizatoria del SOAT, que se ha verificado como incompleta en cuanto a los niveles de satisfacción debido a la exigencia de requisitos innecesarios y la demora en su ejecución, lo cual genera lesión en el administrado, actos que son repetitivos

en el tiempo por parte de las aseguradoras y que pese a las sanciones de multa aplicadas no han cesado. Se precisa por ello la acción del Estado para incorporar cambios normativos que permitan sancionar en base al principio de culpabilidad con la suspensión de labores o el cierre definitivo de dichas empresas, generando con ello mayor coerción.

Recomendaciones

Primera:

Se recomienda la incorporación de cambios normativos que orienten la evaluación de la responsabilidad en base al principio de culpabilidad según el procedimiento administrativo sancionador a fin de lograr sancionar con la suspensión de labores o el cierre definitivo de dichas empresas, generando con ello mayor coerción y evitando la exigencia de requisitos innecesarios para la indemnización del SOAT y la demora en su ejecución, así como la lesión en el administrado.

Segunda:

Se recomienda que los procesos sancionadores que revisa el INDECOPI respecto a las empresas aseguradoras que brindan el servicio de SOAT, deban ser derivados a la competencia de la SBS a fin de que se proceda de acuerdo a sus atribuciones en cuanto a la evaluación del riesgo y la responsabilidad administrativa que encausa la falta denunciada.

Tercera:

Se sugiere que la modificación del artículo 11 del Reglamento de sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, contenido en la Resolución SBS N° 2755-2018, en cuyo literal b señala en la parte final que la calificación de la responsabilidad debe hacerse independiente del dolo o culpa, aún cuando en el esquema administrativo se encuentra consignada la intervención del principio de culpabilidad para la evaluación de la responsabilidad conducente a la sanción, por lo mismo que se debe cambiar dicha estructura normativa a fin de que sea de la siguiente manera:

“Artículo 11. Reglas para la determinación de responsabilidad administrativa”

“En los procedimientos sancionadores iniciados por la Superintendencia resultan aplicables las siguientes reglas”:

(...)

“b. Para las infracciones calificadas como graves y muy graves, la responsabilidad administrativa es subjetiva, para lo cual debe considerarse la configuración de la conducta tipificada como infracción, **aplicándose el principio de culpabilidad**”

Bibliografía

- Aguilar A, R. E. (2017). Imputabilidad de las personas jurídicas en el derecho administrativo sancionador. *Revista entorno, Universidad Tecnológica de El Salvador*(63), 39-44. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <https://www.lamjol.info/index.php/entorno/article/view/6076/5800>
- Alpa, G. (2015). Apuntes sobre el daño contractual. En C. E. Moreno More, *Estudios sobre la responsabilidad civil* (C. E. Moreno More, Trad., Primera ed., págs. 193-226). Lima, Lima, Perú: Ediciones Legales.
- Alzamora Valdez, M. (1987). *Introducción a la ciencia del Derecho* (Décima ed.). Lima: EDDILI.
- Arquillo Colet, B. (2004). Seguro y Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública Sanitaria. *InDret*, 2-30. Recuperado el 12 de Junio de 2020, de https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/181_es.pdf
- Baca Oneto, V. S. (2019). El principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador, con especial mirada al caso peruano. *Revista digital de Derecho Administrativo*(21), 313-344. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5038/503859254013/html/index.html>
- Capcha Coronado, A. (s.f.). ¿Fijemos en el bosque mientras INDECOPI no está? El caso de la fijación concertada de primas y deducibles mínimos de seguros. *Revista Círculo de Derecho Administrativo*, 155-161. Recuperado el 12 de Junio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/download/13685/14309/>

- Cárcamo Seminario, R. (2018). Análisis crítico del régimen de determinación de la responsabilidad administrativa en el derecho Peruano de protección al consumidor. *Revista jurídica de Derecho*, 2-117. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3503/MAE_DER_DP-ADM_001.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Chilón Salcedo, M. (2018). *El Formato de Registro de Accidentes de Tránsito Efectiviza el Pago de la Indemnización en Lima Norte*. Lima: Universidad Privada del Norte.
- Cordero Quinzacara, E. (2012). El derecho administrativo sancionador y su relacion con el derecho penal. *Scielo*(2), 131-157. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502012000200006
- Cordero Quinzacara, E. (2014). Los principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración en el derecho Chileno. *Scielo*, 339-439. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512014000100012
- Cordero, C. R. (2008). El Derecho Administrativo sancionador en Chile. *Revista de Derecho Público*, 89-101. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <http://www.herrerapenaloza.com/images/biblioteca/Cordero-Roman-El-Derecho-administrativo-sancionador-en-Chile.pdf>

- Dermisaky Peredo, P. (2012). La responsabilidad de los servidores públicos. *Redalyc*(13), 10-21. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <http://www.redalyc.org/pdf/4275/427539910002.pdf>
- Díaz Roncal, K. (2016). Fundamentos Constitucional de la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria: Una mirada Crítica de la Regulación del Servicio Civil. *Derecho Y Sociedad*(46), 347-356. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/18858/19076/>
- Fernández Sessarego, C. (2015). Los 30 años del Código Civil peruano de 1984. En J. Espinoza Espinoza, *Análisis sistemático del Código Civil. A tres décadas de su promulgación* (Primera ed., págs. 44-102). Lima, Lima, Perú: Pacífico.
- García Amado, J. A. (Septiembre de 2011). Responsabilidad jurídica. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*(1), 125-132. Obtenido de <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/viewFile/2163/1098>
- García Caverro , P. (2003). *Derecho Económico - Parte General*. Lima: Osbac.
- González Bianchi, P. (2019). Error evidente, culpa en las infracciones aduaneras. *Scielo*, 92-157. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-61932019000200091&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Hilario Leon, L. (2017). *La Responsabilidad Civil*. Lima: Pacífico Editores.
- Linarez Avilez, D. (2012). El laberinto de la cuantificación del daño moral con una mirada desde la Óptica procesal. *Derecho y Sociedad*, 77-87. Recuperado el 12 de Junio de 2020, de

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/download/13105/13716/>

Martínez Ventura, J., Alfaro Rosas, P., Bossio Bossio, C., Guillén Lazo, A., & Tomanguillo Vásquez, A. (2014). Apuntes sobre la nueva Ley de contrato de seguros: Análisis y críticas a dos años de su publicación. *Revista PUCP*, 110-124. Recuperado el 12 de Junio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/download/13582/14206/>

Menéndez Menéndez, O. (2015). *La deficiente cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vulnera derechos constitucionales*. Quevedo - Ecuador: Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Obtenido de <http://190.15.134.12/bitstream/43000/1236/1/T-UTEQ-0082.pdf>

Merlano Sierra, J. E. (2008). La identidad sustancial entre el delito y la infracción administrativa. *Scielo*, 341-360. doi:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972008000200012

Monteros Cartes, C. (1999). La responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos: un estudio introductorio. *Dialnet*, 111-141. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=658931>

Nieto García, A. (2005). *Derecho Administrativo Sancionador* (Cuarta ed.). Madrid: Tecnos.

Nieto Martín, A. (2009). Culpabilidad y Constitución. (P. U. Perú, Ed.) *Derecho y Sociedad*(32), 215-227. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17427>

- Obiol Anaya, E. F. (20018). La responsabilidad subjetiva u objetiva en el procedimiento admisnistrativo sancionador en la legislación peruana. *Scielo*, 48(129), 491-506. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v48n129/0120-3886-rfdcp-48-129-491.pdf>
- Ordóñez Ordóñez, A. E. (2014). Las nuevas tendencias del derecho de seguros en las legislaciones más recientes de los países Latinoamericanos. *Revista Javeriana*, 13-60. Recuperado el 12 de Junio de 2020, de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/11244/9960>
- Ortega Piana, M. A. (2011). Responsabilidad civil y seguros. *Revista PUCP*, 58-75. Recuperado el 12 de Junio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12052/12619/>
- Osterling Parodi, F., & Castillo Freyre, M. (2003). *Tratado de las obligaciones*. Lima: Pontificia Universidad Catolica del Perú.
- Patiño Escobar , A. (2013). El derecho de subrogación en materia de SOAT en Colombia. *Revista UPB*, 1-44. Recuperado el 12 de Junio de 2020, de <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/107/Monografia%20Andres%20FINAL%20%281%29%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ramírez Torrado, M. (2008). Consideraciones de la Corte Constitucional acerca del Principio de Culpabilidad En el Ámbito sancionador Administrativo. *Scielo*, 153-177. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972008000100007

Real Academia de la Lengua Española. RAE. (2018). *Real Academia Española*.

Obtenido de Diccionario de la Lengua Española. Edición Tricentenario:
<https://dle.rae.es/?id=80fotNV|80hOfyd>

Rebollo Puig, M. (2016). Responsabilidad sancionadora de personas jurídicas, entes sin personalidad y administradores. *Revista IUS ET VERITAS*(53), 1995-2929. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/16545/16891>

Rojas Montes, V. V. (2017). La responsabilidad administrativa subjetiva de las personas jurídicas. *Dialnet*, 8(2), 3-25. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6172799.pdf>

Rojas Rodríguez, H. F. (2014). *"Los Principios Constitucionales Limitadores del Ius Puniendi ¿Qué límites rigen el Derecho Administrativo Sancionador?"*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Rojas Rodríguez, H. F. (2015). *Fundamentos del derecho administrativo sancionador* (Primera ed.). Lima, Lima, Perú: Pacífico.

Romero Jouvín, E. (1995). Los límites del derecho. (U. C. Guayaquil, Ed.) *Revista Jurídica. Facultad de Jurisprudencia*, 50-57. Obtenido de https://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/1995/02/10_los_limites_del_derecho.pdf

Torres Vásquez, A. (2008). *Diccionario de Jurisprudencia Civil*. Lima: Grijley E.I.R.L.

- Vargas López, K. (1999). Principios del procedimiento Administrativo Sancionador. *Revista IVSTITIA*, 59-70. Recuperado el 11 de Junio de 2020, de <https://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica14/art4.pdf>
- Vélez Vélez, H. (Enero de 2015). La responsabilidad jurídica: aproximación al concepto, relación con otros conceptos jurídicos fundamentales y su funcionamiento. *Revisat de la Facultat de Derecho y Ciencias Políticas-UPB*, XLV(122), 127-151. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v45n122/v45n122a06.pdf>
- Zornosa Prieto, H. (2011). El seguro de Responsabilidad Civil su evolución Normativa y Jurisprudencial en Colombia. *Revista Javeriana*, 85-143. Recuperado el 12 de Junio de 2020, de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/18503/14495>

Anexos

Cuestionario de encuesta para la validación de los expertos en derecho laboral

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

**Tesis: “La incompleta protección indemnizatoria del SOAT, como
responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de
culpabilidad”**

Cuestionario de encuesta

Se hace presente este formulario de encuesta en el que se han plasmado las principales ideas y posturas de la investigación basadas en la problemática descrita en función de las variables, las cuales se proyectan como afirmaciones, críticas y propuestas de solución, las mismas que deben ser absueltas por los expertos en derecho a fin de reconocer el nivel de validación de sus contenidos.

**I. Variable independiente: La incompleta protección
indemnizatoria del SOAT.**

1. AFIRMACIÓN - CONCEPTO: Los eventos considerados como accidentes de tránsito generan daños respecto a las personas involucradas como víctimas, ante lo cual corresponde otorgar un beneficio económico o de atención, que satisfaga la necesidad indemnizatoria por la afectación.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

2. **AFIRMACION – CRITICA:** La forma en que se ejecuta la intervención del SOAT por parte de las aseguradoras, resulta insuficiente desde la perspectiva temporal puesto que no atiende con inmediatez el incidente, lo cual tiene por característica un problema de excesivo trámite en cuanto a los requisitos entendidos como barreras burocráticas para su cobro.
- a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
3. **AFIRMACIÓN – PROPUESTA:** La solución al problema de la incompleta protección indemnizatoria, estaría enfocada en razón de la intervención del Estado para que mediante su fiscalización se pueda crear una característica de inmediatez para el cobro de dicho beneficio, favoreciendo a la víctima del accidente de tránsito y estableciendo un límite de equilibrio con los intereses de la aseguradora
- a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.

II. Variable dependiente: La responsabilidad administrativa de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad.

4. DEFINICIÓN: A nivel administrativo la responsabilidad se mide en función de la falta objetiva sobre la regla, lo cual tiene como consecuencia una sanción de tipo administrativa, que se aplica en función al esquema de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
5. CRITICA: La aplicación de las sanciones a nivel administrativo se desarrollan en base al derecho administrativo sancionador que recoge el ius puniendi del Estado, lo cual se orienta en función a la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero no se adecúa al sentido del principio de culpabilidad que recoge.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opina.
6. La determinación de la responsabilidad de las compañías aseguradoras, respecto de la incompleta protección indemnizatoria,

dependerá de la aplicación del ius puniendi del Estado comprendido en el derecho administrativo sancionador, sólo si se analiza en función al principio de culpabilidad.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION

ACTA DE SUSTENTACIÓN

A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 23-2022-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADA de doña: **Cynthia Beatriz Sánchez Burga**.
Siendo las 12:30 p.m del día jueves 12 de mayo del 2022 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: “**LA INCOMPLETA PROTECCIÓN INDEMNIZATORIA DEL SOAT COMO FUNDAMENTO JURÍDICO DE RESPONSABILIDAD DE LAS ASEGURADORAS BASADA EN EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD**”, designados por Decreto N° 135-2019-UI-FDCP-UNPRG de fecha 20 de noviembre del 2019, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. VICTOR ANACLETO GUERRERO.
SECRETARIO : Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO.
VOCAL : Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ

La tesis fue asesorada por Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA, nombrado por Decreto N°135-2019-UI-FDCP-UNPRG de fecha 20 de noviembre del 2019.

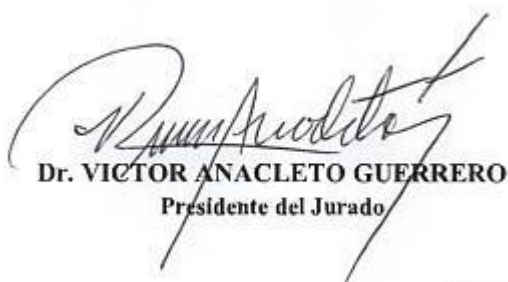
El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°116-2022-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 09 de mayo del 2022.

La tesis fue presentada y sustentada por la bachiller **Cynthia Beatriz Sánchez Burga** y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADA con la nota de 17.25 (diecisiete y 00/25) en la escala vigesimal, mención de BUENO.**

Por lo que queda APTA para obtener el Título Profesional de ABOGADA, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 13:10 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link: <https://drive.google.com/file/d/11OGAAQvCAGos148ezXcMr17o4Ahco38b/view?usp=sharing>

Lambayeque, jueves 12 de mayo del 2022


Dr. VICTOR ANACLETO GUERRERO
Presidente del Jurado

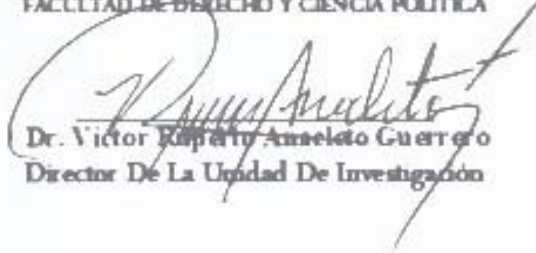

Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO
Secretario del Jurado


Abog. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Vocal del Jurado.

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 23-2022-UI-FDCP correspondiente a Cynthia Beatriz Sánchez Burga, evento que se ha realizado de manera virtual el día jueves 12 de mayo del 2022 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 27 de julio del 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA


Dr. Victor Anacleto Guerrero
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA, Asesor de Tesis de Bach. Cynthia Beatriz Sánchez Burga, titulada ***“LA INCOMPLETA PROTECCIÓN INDEMNIZATORIA DEL SOAT COMO FUNDAMENTO JURÍDICO DE RESPONSABILIDAD DE LAS ASEGURADORAS BASADA EN EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD”***, luego de la revisión exhaustiva del documento, constato que la misma tiene un índice de similitud de 15%(QUINCE %) verificable en el reporte de similitud del programa TURNITIN.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 14 de febrero del 2022



Abog. José Eloy Gamonal Guevara

D.N.I. 16424601

Asesor

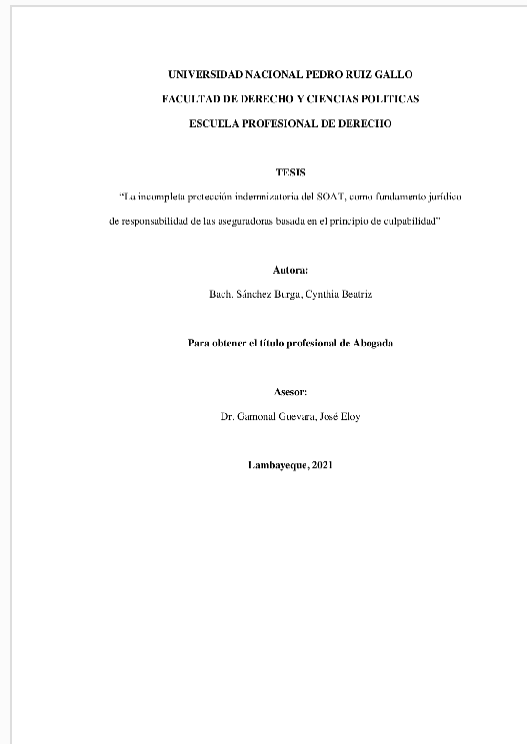


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Cynthia Beatriz Sanchez Burga
Título del ejercicio: REVISION DE TESIS
Título de la entrega: La incompleta protección indemnizatoria del SOAT, como fu...
Nombre del archivo: TESIS_FINAL_SANCHEZ_BURGA_CYNTHIA.docx
Tamaño del archivo: 363.84K
Total páginas: 103
Word count: 20,322
Total de caracteres: 111,531
Fecha de entrega: 12-feb.-2022 11:50p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega... 1761027525



La incompleta protección indemnizatoria del SOAT, como fundamento jurídico de responsabilidad de las aseguradoras basada en el principio de culpabilidad

INFORME DE ORIGINALIDAD

15%

INDICE DE SIMILITUD

16%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

6%

TRABAJOS DEL
ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	ezproxybib.pucp.edu.pe Fuente de Internet	1%
2	repositorio.unprg.edu.pe:8080 Fuente de Internet	1%
3	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	ri.ues.edu.sv Fuente de Internet	1%
5	scielo.conicyt.cl Fuente de Internet	1%
6	www.redalyc.org Fuente de Internet	1%
7	docplayer.es Fuente de Internet	1%
8	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%